entrepueblos
entrepobos
herriarte
entrepobles
Revista periódica · Diciembre 2025
84

CRÓNICAS DE EXILIO Y DIGNIDAD CENTROAMERICANA

DEL PARO EN ECUADOR AL TRIUNFO DEL NO

ESPECIAL MEMORIA 2024

DEL SUR ANDINO A HUELVA: LA TIERRA CANSADA DEL PROGRESO

ESCUELA ACCIÓN ENTREPUEBLOS: COLECTIVIZANDO ESPERANZAS

SUMARIO

3 Cuando hablar es resistir: crónicas de exilio y dignidad centroamericana

9 El estado del espacio cívico en América Latina

13 Del Paro en Ecuador al triunfo del NO

19 ESPECIAL MEMORIA 2024:
RESISTENCIAS QUE SOSTIENEN LA VIDA. FEMINISMOS, SOBERANÍAS Y LUCHAS POR LA JUSTICIA GLOBAL

ESPECIAL REVISTA 84:
DEL SUR ANDINO A HUELVA:
LA TIERRA CANSADA DEL PROGRESO

28 Una Huelva de playas y progreso donde las mujeres y la tierra pagan el precio de la transición verde

30 Profundización de la lógica extractivista en Perú

36 IX Congreso de Economía Feminista de Sevilla resistencias globales desde los cuidados

40 'Mujeres y conflictos ecoterritoriales: Impactos, estrategias y resistencias' de Rocío Silva Santiesteban

42 Escuela Acción Entrepueblos: Colectivizando esperanzas

La profundización y consolidación del rol de proveedor de materias primas de América Latina condujo a un rápido aumento de la desigualdad, además de incentivar un modelo de desarrollo extractivista, dando un desproporcionado poder al sector privado.

El circuito de la precariedad se completa con delegados sindicales cooptados por las empresas, un sistema de sanciones por "baja productividad" que no tiene en cuenta la salud ni la edad, y el racismo institucional de los contratos en origen con compromisos de retorno.

Construir esperanza cuando nos sentimos vulnerables es un ejercicio profundo de resistencia.

EDITA
Entrepueblos · Asociación declarada de utilidad pública UP-78093-SD
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Esteva&Estêvão

DEPÓSITO LEGAL
VA-438-09
Entrepueblos no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos de este boletín

FOTO DE PORTADA
Javier Morán

AYÚDANOS A INCORPORAR A ENTREPUEBLOS NUEVAS SOCIAS Y SOCIOS
ASÓCIATE Y COLABORA ACTIVAMENTE Boletín de suscripción en la contraportada

Necesitamos tu apoyo para crecer y seguir garantizando nuestra acción solidaria con AUTONOMÍA e INDEPENDENCIA

Cuando hablar es resistir: crónicas de exilio y dignidad centroamericana

Anna Celda · Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l'Amèrica Central (TCDHPAC)

Lidia Ucher · *Comunicación Entrepueblos*

Durante dos días el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La Bonne, Barcelona), defensoras centroamericanas tejieron memoria, denuncias y estrategias frente al autoritarismo. Esta crónica recoge sus voces: periodistas, activistas y feministas que resisten desde el exilio, los cuerpos y la palabra

La Bonne acogió el 21 y 22 de octubre de 2025 la segunda edición de las jornadas "Memoria y Resistencias. Caminos por la dignidad en América Central", organizadas por la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l'Amèrica Central, con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el ICIP, la Generalitat de Catalunya y La Bonne.

Este espacio seguro y político reunió a defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas feministas y comunidades exiliadas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Desde una mirada regional, se tejieron reflexiones colectivas sobre la represión, el exilio, la criminalización, la memoria y las estrategias de cuidado que sostienen la defensa de los derechos.

Entrepueblos estuvo presente para recoger y amplificar esas voces. Lo que sigue es una crónica tejida desde la escucha: cuatro relatos que atraviesan la memoria, los cuerpos, la justicia y la esperanza.

Anna Celda · TCDHPAC

Mesa 1

Los regímenes autoritarios avanzan sobre los derechos: la cooptación del Estado en América Central

La primera mesa reunió a defensoras y activistas de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras para reflexionar sobre la memoria y las resistencias en la región. Participaron, Edipcia Dubón desde Nicaragua, Xiomara Rivas desde El Salvador, la hondureña Regina Fonseca (psicóloga y feminista del CDM) y el guatemalteco Jordán Rodas (exprocurador de Derechos Humanos). Sus intervenciones situaron los derechos sexuales y reproductivos como termómetro democrático y alertaron sobre la cooptación de la justicia y el exilio forzado.

Quedó claro desde el primer momento que la represión actual es la continuación de una historia inacabada: la de las dictaduras militares, la impunidad y el olvido. Todas las intervenciones coincidieron en que hoy la memoria no es una tarea del pasado, sino un territorio de disputa política y vital.

¿Cómo se sostiene un régimen autoritario en el siglo XXI? Cuatro voces, cuatro trayectorias exiliadas y comprometidas, desmontaron la fachada institucional de sus países y denunciaron cómo la concentración del poder, la corrupción sistémica y la represión silenciosa asfixian cualquier intento de democracia real en la región.

Desde Nicaragua, **Edipcia Dubón** trazó un mapa emocional y político de la resistencia: no solo habló del miedo, sino de lo que se hace con él. "Cada vez que dejamos de reír, el que ríe es el régimen. Por eso seguimos riendo, y seguimos denunciando", afirmó. Como directora de la Fundación Puentes para el Desarrollo, exiliada por el régimen de Ortega, Edipcia recordó que la lucha no se detiene al cruzar una frontera. La red que sostiene a Nicaragua hoy, dentro y fuera del país, se teje a base de solidaridad cotidiana: *galletas de avena para personas presas, zooms terapéuticos para sobrevivir al exilio, catamales compartidos como ritual de pertenencia*. En palabras suyas, "estamos construyendo islas de libertad en medio del miedo". Dubón concluyó recordando que "la historia nos ha enseñado que solo juntas las centroamericanas hemos podido salir de la crisis, la dictadura y la violencia que han sido históricas en nuestra región".

EL SALVADOR: "BUKELE ES UN BUEN ALUMNO DE ORTEGA"

Cuando **Xiomara Rivas** habló, se escuchó la voz de una generación entera de pedagogas y feministas salvadoreñas que han visto retroceder, en tiempo récord, décadas de luchas. "Bukele es un buen alumno de Ortega", afirmó en su intervención en la primera mesa de las jornadas. "Hace lo mismo, pero sin hacer tanto escándalo. Mejora la receta y evita los errores visibles." La frase, tan demoledora como certera, resume lo que muchas organizaciones sociales de El Salvador sienten hoy: que la deriva autoritaria no solo avanza, sino que lo hace con impunidad internacional y una narrativa eficaz de modernidad y orden.

Rivas explicó que el actual gobierno salvadoreño ha logrado imponer su modelo de control sin cerrar ONG ni desatar una represión tan aparatosa como la de Nicaragua. Pero el resultado es el mismo: derechos derogados, cuerpos vigilados y periodismo desplazado. Solo quedan medios oficialistas dentro del país; el periodismo crítico resiste desde el exilio, desmontando pactos opacos con pandillas y revelando que la "seguridad" tiene un alto coste en corrupción y autoritarismo.

Desde Honduras, la feminista y psicóloga **Regina Fonseca** advirtió que el retroceso democrático se mide, sobre todo, en los cuerpos de las mujeres. Recordó que la penalización absoluta del aborto y las trabas a la anticoncepción no son hechos aislados, sino parte de un entramado político y religioso que busca disciplinar la autonomía. Insistió en que la libertad sexual y reproductiva es el verdadero termómetro de una democracia y que, cuando se restringe, "se está erosionando la esencia misma de los derechos humanos".

Desde Guatemala, **Jordán Rodas**, exprocurador de Derechos Humanos, ofreció una mirada lúcida sobre la corrupción y el racismo estructural que atraviesan la sociedad guatemalteca. Denunció que "la corrupción se ha convertido en la forma de gobernar" y que la impunidad ha vaciado de sentido la democracia. Recordó, además, la desigualdad que padecen los pueblos originarios, las mujeres y las personas LGTBIQ+, víctimas de una exclusión histórica que sigue marcando el presente.

Para Entrepueblos, estas voces resuenan con muchas de las luchas que acompañamos en la región: desde la campaña Justicia con Beatriz hasta las redes de defensoras criminalizadas.

Anna Celda · TCDHPAC

Mesa 2
Feminismos frente al control político y moral

La segunda jornada abrió con la mesa "Políticas, represión y moralidades: cuerpos, decisiones, salud, afectos y diversidad", moderada por Lissete Alas (El Salvador). Participaron Bertha Massiel (Nicaragua), Morena Herrera (El Salvador), Sara Álvarez Medrano (Guatemala) y Regina Fonseca (Honduras).

La conversación abordó cómo los cuerpos se han convertido en territorio de disputa ideológica, política y religiosa en Centroamérica. Fue un recorrido coral por los cuerpos en resistencia, las maternidades impuestas, las terapias colectivas, los exilios y las rebeliones feministas frente a un territorio donde los derechos sexuales y reproductivos son campo de batalla.

Bertha Massiel, desde Nicaragua, abrió el diálogo denunciando que el control estatal sobre los cuerpos no es solo una cuestión legal, sino una estrategia estructural de represión. Recordó que las feministas nicaragüenses han sufrido torturas sexuales durante las detenciones y que el tejido social ha sido desmantelado. "La violencia no es solo física –dijo–, es jurídica, cultural, sexual y moral." Su intervención situó el feminismo nicaragüense como una resistencia clandestina y vital para sobrevivir.

Regina Fonseca, desde Honduras, advirtió que el retroceso democrático se mide sobre todo en los cuerpos de las mujeres. "Los derechos sexuales y reproductivos son una medida real del grado de libertad de un país", afirmó. En su país, una niña menor de 14 años da a luz cada siete horas. La penalización absoluta del aborto y la amenaza de prohibir incluso la anticoncepción de emergencia –impulsada por sectores religiosos y empresariales– son, según Fonseca, "parte de una estrategia política para disciplinar la autonomía".

Morena Herrera, desde El Salvador, defendió el litigio estratégico como herramienta política y humana. Relató los casos de Manuela y Beatriz, dos mujeres salvadoreñas víctimas de violencia obstétrica y criminalización. La primera murió en prisión tras un parto extrahospitalario; la segunda fue obligada a gestar un feto sin cerebro. "Escuchar, documentar, movilizar y cuidar a las familias forma parte del proceso de transformación", sostuvo. Reivindicó el rol de las alianzas transnacionales y el acompañamiento a las mujeres encarceladas como formas concretas de solidaridad feminista.

Sara Álvarez Medrano, terapeuta social maya, invitó a mirar el cuerpo como territorio político y archivo de memorias colectivas. Habló de dolor, culpa y obediencia, pero también de sanación y autonomía. "Nos enseñaron a ser buenas víctimas", señaló, recordando que la sanación no puede reducirse a la terapia individual: "Los procesos colectivos permiten romper el mandato de silencio." Cerró su intervención afirmando: "No voy a ser víctima de nadie más."

Frente a discursos que dictan qué es moral y qué no, insistió en recuperar cosmovisiones que reconozcan la diversidad de cuerpos y disidencias. "Para generar pensamiento crítico y procesos emancipatorios –concluyó– necesitamos trabajar con los sentires, las emociones y la intergeneracionalidad".

La mesa concluyó con una certeza compartida: la represión no ha conseguido borrar la esperanza. "La confianza se reconstruye desde los cuerpos, la memoria y los afectos", resumió Lissete Alas al cerrar el diálogo. ■

Mesa 3.
Migraciones y exilios: caminos por y desde América Central

La tercera mesa reunió voces que analizan las causas del desplazamiento forzado y las estrategias de resistencia que nacen en el tránsito y el exilio. Participaron Carolina Gutiérrez (Guatemala), Juan Carlos Arce (Nicaragua), Angélica Cárcamo (El Salvador) y Regina Fonseca (Honduras), moderados por Amaru Ruiz (Nicaragua).

Desde el inicio, se propuso mirar la migración no como excepción, sino como condición humana y política: "Las especies se mueven; las fronteras las inventamos nosotros."

Arce situó la migración nicaragüense en tres crisis entrelazadas: democrática, de protección y de solidaridad internacional. "Nos convirtieron en números, en remitentes de remesas", dijo. Denunció que el poder en Nicaragua se sostiene sobre la impunidad y los crímenes de lesa humanidad.

Desde la frontera guatemalteca, **Carolina Gutiérrez** relató cómo la migración femenina ha crecido hasta volverse generacional: "Se fue mi madre, mi hermana, mi prima [...] entonces me toca a mí." Denunció la violencia sexual y el control de los cárteles en el tránsito: "Nos bajan de los autobuses, revisan los celulares; la inseguridad para las mujeres es total."

Chevy Solís, desde Panamá, amplió la mirada hacia el sur. En el Tapón del Darién –dijo– la ruta migratoria se ha vuelto inhumana: más de medio millón de personas la cruzaron en 2023. "Entre enero y mayo de 2024, Médicos Sin Fronteras atendió 3 000 sobrevivientes de violencias sexuales. En Panamá, tener compasión también puede volverse delito."

Angélica Cárcamo recordó que "El Salvador exporta mano de obra desde hace décadas", pero subrayó que el exilio reciente afecta a periodistas y defensoras. "Acompañamos a 53 periodistas en procesos de exilio; varias dejaron a sus hijos atrás. El duelo de partir también es político: resistir desde fuera es seguir siendo útil." Su reflexión cerró con una llamada a articular redes de apoyo regionales: "La única forma de resistir el exilio es hacerlo juntas. En El Salvador aprendimos de Nicaragua la importancia de la organización y la prevención. Resistimos porque aprendimos." **Amaru Ruiz** cerró recordando el desplazamiento indígena y afrodescendiente en Nicaragua: "Más de 10 000 personas misquitas, mayagnas y criollas han huido hacia Costa Rica tras las invaciones violentas de colonos y proyectos extractivos en sus territorios. No solo pierden casa y tierra; pierden su cosmovisión, porque su vida está anclada a la naturaleza."

En el diálogo final coincidieron en que la migración refleja la enfermedad política de la región. "Los regímenes expulsan para controlar y las remesas sostienen el sistema", resumió Arce. Y Solís dejó la frase que condensó el espíritu de la mesa: "La frontera no está en los países; la llevamos en el cuerpo. Si tu cuerpo es empobrecido, racializado o diverso, tu cuerpo es tu frontera."

Tras una fotografía colectiva en solidaridad con el abogado guatemalteco **Ramón Cadena,** defensor de derechos humanos en riesgo de detención, la tarde continuó con espacios de trabajo por ejes –juventudes, memoria, periodismo, exilios, protección integral feminista, justicia internacional y expresiones artísticas– para construir propuestas de articulación desde la Taula. ■

Mesa 4.
El exilio como resistencia política y reconstrucción de comunidad

La última mesa, "¿Abrazamos a las personas migrantes y exiliadas o solo vemos brazos?", cerró las jornadas con una reflexión coral sobre la vida en el exilio como forma de resistencia. Participaron Samantha Jirón (Nicaragua), Ivania Cruz (El Salvador), Paula Santos (Honduras) y Rafa Rosal Paz y Paz (Guatemala), moderadas por Tamara Morazán (Nicaragua).

Desde el inicio, **Ivania Cruz** marcó el tono denunciando la brecha entre los derechos reconocidos y su cumplimiento real: "La ley dice que tenemos derechos; la práctica nos los quita con trámites interminables y citas imposibles." **Samantha Jirón** encarnó esa precariedad: "Salí de la cárcel sin país, sin papeles y sin horizonte. España me acogió, pero su burocracia no me deja vivir." Y **Rafa Rosal** completó el retrato con crudeza: "La corrupción también se cuela en los pasillos de extranjería: hay quien vive del miedo y la urgencia de los otros."

El diálogo avanzó hacia el racismo estructural que atraviesa los procesos migratorios. "La migración tiene rostro, tono de piel y continente", afirmó Jirón. Cruz añadió que el color

Anna Celda · TCDHPAC

de piel y el acento siguen marcando el acceso a derechos básicos: "Puedes tener máster, pero tu acento te devuelve a la limpieza." Rosal resumió con ironía: "Aquí el trabajo se asigna por color, no por talento."

Paula Santos situó el foco en las mujeres migrantes que sostienen la vida cotidiana, invisibles en las estadísticas pero esenciales para el cuidado social: "Cuidamos a los hijos y a los mayores, pero nadie cuida de nosotras." Denunció la trata y la explotación laboral y reclamó políticas que crucen género, clase, raza y estatus migratorio.

Todas coincidieron en la importancia de las redes de apoyo como espacios de resistencia. Santos destacó experiencias como Regularización Ya o Barcelona Cuida: "Lo hacemos nosotras porque el Estado no llega." Rosal reivindicó la cultura como refugio y acto político: "El arte no es ocio; es reconstrucción de comunidad."

El cierre de la mesa mostró la huella de la fuerza colectiva. "No queremos ser objeto de ayuda, sino sujeto político", afirmó Jirón. Rosal advirtió: "Seguimos reproduciendo un modelo colonial: queremos manos para trabajar, no cuerpos con derechos." Cruz insistió en que "el futuro será feminista o no será", y Santos concluyó con una consigna que se convirtió en eco común: "Organizarnos, educar en antirracismo y solidaridad: esa es la tarea."

Entrevista **JORDÁN RODAS ANDRADE**

Guatemala: justicia cooptada y exilio sin retorno

Exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala entre 2017 y 2022, Jordán Rodas participó en las jornadas de la *Taula* para explicar cómo la corrupción y la concentración del poder han vaciado de contenido la democracia en su país. Desde Euskadi, donde vive exiliado, habló con claridad sobre las causas estructurales de la impunidad que sigue marcando la historia guatemalteca.

Rodas explicó que en Guatemala "la corrupción es lo que los motiva –a la mayoría de políticos guatemaltecos–, porque no llega ni siquiera a ser un debate ideológico". Denunció la existencia de un pacto entre funcionarios, políticos y empresarios conservadores –el llamado pacto de corruptos– que ha cooptado el sistema judicial y blindado a las élites frente a cualquier intento de rendición de cuentas. "Su estrategia es tener una justicia no independiente, cooptar la justicia para garantizarse impunidad", resumió.

En su paso por la Procuraduría, recorrió comunidades rurales y constató el abandono de los servicios públicos y la desigualdad que atraviesa a las mayorías sociales: "Pude ver el estado de abandono de la salud y la educación pública", recordó –y, tras una breve pausa reflexiva, sentencia: "La dignidad es la esencia de los derechos humanos."

Más de un centenar de defensores y defensoras guatemaltecas viven hoy en el exilio, y Rodas es uno de ellos. "Es una vergüenza para una democracia que haya exiliados. No podemos hablar de democracia cuando hay exiliados", afirmó, subrayando la urgencia de una política pública que garantice condiciones dignas fuera del país y vías seguras de retorno.

Rodas advirtió que en Guatemala los procesos de justicia transicional no pueden darse por cerrados. Recordó que, cuando se intenta pasar página sin asumir responsabilidades, *se olvida que detrás de cada caso hay personas, no números, y que la verdadera transición sólo será posible con justicia*.

En Cataluña y Euskadi, donde ha encontrado acogida, Rodas valora la solidaridad histórica con los procesos de memoria y justicia en Guatemala. Reconoce que la cooperación catalana y vasca ha permitido rescatar archivos militares y avanzar en la identificación de víctimas. En sus palabras, esa solidaridad "mantiene viva la búsqueda de la verdad y demuestra que la memoria no es pasado, sino una tarea pendiente de todos los pueblos."

Entrevista **ANGÉLICA CÁRCAMO**

El Salvador: Periodismo entre la dignidad y el duelo

La periodista salvadoreña Angélica Cárcamo, participante en la primera jornada, suma al eje de la memoria una mirada desde el exilio y la defensa del derecho a informar. Actualmente, explicó, El Salvador vive bajo un régimen de excepción prolongado en el que se ha desmantelado la independencia judicial y se ha criminalizado a periodistas y defensoras. Como señaló en la mesa, "transitamos de un gobierno que entró por vía democrática en 2019 a un régimen autocrático que se consolida como dictadura".

Angélica Cárcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), lo dice con serenidad, pero sin concesiones: la salida del país fue una necesidad vital. "No soy útil en una celda de cuatro paredes", afirma. Su decisión, como la de muchas otras periodistas, llegó en mayo de 2025. A partir de ese mes, las detenciones de voces críticas –como la del abogado constitucionalista Enrique Anaya o de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López– marcaron un punto de inflexión: *queda*rse era asumir el riesgo de cárcel o desaparición.

En las jornadas de la Taula per Amèrica Central, Cárcamo compartió lo que supone ese exilio forzado: dejar pertenencias, familia, rutina. "Mi vida se convirtió en dos maletas y en las llaves de una casa que no sé cuándo volveré a abrir", confesó. Aun así, la periodista insiste en que no se trata solo de huida, sino de estrategia. Desde fuera, mantiene viva su misión: seguir acompañando a colegas, hacer incidencia y visibilizar lo que ocurre en El Salvador.

Su ética profesional –aprendida desde los 17 años en medios comunitarios– está intacta. Cree en el periodismo como herramienta de transformación: "Solo una sociedad debidamente informada puede tomar decisiones conscientes", sostiene. Por eso, los regímenes autoritarios atacan la prensa independiente: porque es "el bastión en defensa del derecho a la información".

Desde el exilio, Cárcamo combate el miedo con trabajo. Sabe que continuar informando, aunque sea a distancia, es una forma de resistencia. "El reto más grande es seguir haciendo nuestra labor desde donde esté. No es fácil, pero es importante. Hoy más que nunca."

Entrevista **JOSHI LEBAN**

El periodismo como defensa democrática

La periodista y activista Joshi Leban, integrante de la Sombrilla Centroamericana, participó en las jornadas con un mensaje claro: el periodismo no puede mantenerse neutral ante el avance de los regímenes autoritarios.

"Los medios de comunicación tienen un rol fundamental hoy más que nunca", afirmó. "La labor de las y los periodistas es necesaria para la defensa de la democracia como la conocemos." Desde su experiencia regional, Leban subrayó que no se pueden defender los derechos humanos sin proteger la democracia, porque ésta constituye "la base de cualquier sociedad que aspire al bien común y a la paz". Para ella, los periodistas deben abandonar la idea de objetividad distante y reconocerse como actores de cambio social: "No basta con narrar lo que ocurre; hay que comprometerse con la búsqueda de libertad y con la defensa de la libertad de expresión."

La comunicadora insistió en la necesidad de reinventar el oficio. "Se necesita un periodismo diferente, que no siga reforzando discursos autoritarios, que presente propuestas, que respalde la labor de las defensoras y defensores y que no dé tanto espacio a los regímenes autoritarios", señaló. A su juicio, si el periodismo no se transforma, "también está en riesgo de desaparecer."

Leban planteó una reflexión sobre la responsabilidad social del periodismo: "No basta con tirar una información y desentenderte; tenés una responsabilidad ante eso." Invitó a repensar los contenidos desde una ética de la esperanza: "Tenemos que preguntarnos qué estamos publicando, qué aportan nuestros contenidos a la construcción de un mundo digno, igualitario y en paz."

Su intervención cerró con una advertencia y una apuesta: la defensa de la democracia pasa también por reinventar el modo en que se comunica: "Reinventar el periodismo es también resistir."

El estado del espacio cívico en América Latina

La **Red EULAT** de incidencia hacia las instituciones europeas sobre América Latina, de la que Entrepueblos forma parte junto a otras 38 organizaciones de 13 países de la Unión Europea, ha publicado este 2025 el informe sobre *El estado del espacio cívico en América Latina*, que analiza los desafíos que enfrenta la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos en general en América Latina, con capítulos específicos para la situación en **Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador**. Son análisis y reflexiones que nos parecen importantes de compartir con todas las personas que nos acompañan y colaboran en la cooperación solidaria de Entrepueblos. Por esto reproducimos a continuación una síntesis del análisis general para América Latina del informe, con la recomendación de su lectura completa, incluidos los capítulos de los países.

En los últimos años, los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades civiles y políticas se han deteriorado en numerosos países, facilitando ataques sistemáticos contra el espacio cívico y la defensa de los derechos humanos. En América Latina, el cierre del espacio cívico es una tendencia alarmante.

La región enfrenta un avance del autoritarismo y una erosión del estado de derecho, caracterizados por el aumento de la criminalización y represión de la protesta social, la vigilancia estatal y la militarización. Estas dinámicas responden a estrategias comunes adoptadas por gobiernos autoritarios en contextos marcados por la desigualdad, la inseguridad, la debilidad institucional y el descontento social. A esto se suma el poder de élites financieras, políticas y criminales que, como actores de facto, profundizan los modelos extractivistas y debilitan aún más el espacio cívico.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) define el espacio cívico como "el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades, el cual permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros, acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones."

Esta definición identifica los elementos clave que definen el espacio cívico como un conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales: el derecho a la participación en los asuntos públicos de un país, a la asociación y a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y al acceso a la información, entre otros. El grado en que estos derechos están garantizados en un contexto dado determina el grado de apertura del espacio cívico.

La responsabilidad principal de crear un entorno favorable para la sociedad civil recae en los Estados, pues es su obligación crear las condiciones políticas y jurídicas que garanticen que toda persona pueda disfrutar de todos sus derechos y libertades. Dicho esto, un entorno favorable está también determinado por normas y prácticas sociales y culturales, factores económicos y valores promovidos tanto por el Estado como por la sociedad civil en su conjunto y en colaboración con otros actores no estatales, como por ejemplo las empresas y los medios de comunicación.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON EL ESPACIO CÍVICO EN AMÉRICA LATINA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El estado del espacio cívico es especialmente preocupante en América Latina, donde existe una clara tendencia a su cierre. Además, América Latina es a la vez la región más desigual del mundo y la más peligrosa para las personas defensoras de derechos humanos.

En primer lugar, las investigaciones indican que cuando se reprime el espacio cívico disminuye la calidad de la democracia, como demuestran los datos de la encuesta de Latinobarómetro 2023, que indican que el apoyo a la democracia en la región ha caído un 15% desde 2010.

En segundo lugar, las amenazas a las personas defensoras de los derechos humanos tienen un efecto amedrentador sobre la sociedad civil en general, reduciendo su activismo y repercutiendo negativamente en la sociedad. Por ejemplo, muchos de los logros alcanzados en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, LGBTQ+ y los pueblos indígenas se ven amenazados por la actual ola de medidas restrictivas.

De particular importancia en la región por el alto riesgo que corren perpetuamente son las personas defensoras de la justicia climática y ambiental y los pueblos indígenas, en particular quienes se oponen a los megaproyectos que tienen un alto impacto sobre el medioambiente, el agua o la biodiversidad en sus territorios, como son los proyectos extractivistas, de infraestructura, o la agroindustria. Datos del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) identificaron casi 2.000 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe, lo que representa el 42% del total de ataques en todo el mundo entre enero de 2015 y diciembre de 2022. Aproximadamente el 35% de estos ataques fueron contra defensores indígenas, y la mayoría estaban vinculados a actividades extractivas como la minería y la agroindustria.

Datos del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) identificaron casi 2.000 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe

¿QUÉ ESTÁ IMPULSANDO EL CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO EN AMÉRICA LATINA?

Aunque no sea posible identificar una sola causa específica en toda la región, varios estudios indican que factores globales y dinámicas regionales influyen mucho en las actitudes hacia el espacio cívico, mientras que las correlaciones de fuerzas nacionales determinan los métodos, los objetivos y el grado de represión.

En el contexto de América Latina, sin embargo, es posible identificar una serie de factores comunes que impulsan la tendencia a su cierre.

En primer lugar, la influencia del sistema económico neoliberal globalizado que se impuso en gran medida en la región a través de los Programas de Ajuste Estructural que presionaron a los gobiernos para la privatización los activos públicos, la desregulación de las industrias y la liberalización del comercio y la inversión. Con este sistema, América Latina se reafirmó como proveedora de materias primas, y se instó a la región a buscar una "ventaja competitiva" mediante el abaratamiento de la mano de obra y los recursos naturales.

Esta profundización y consolidación del rol de proveedor de materias primas de América Latina condujo a un rápido aumento de la desigualdad, además de incentivar un modelo de desarrollo extractivista, dando un desproporcionado poder al sector privado, particularmente a las grandes empresas y multinacionales, y contribuyendo a una pérdida de confianza en los modelos democráticos en la región. A su vez, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente –especialmente quienes se oponen a la extracción de recursos, proyectos de infraestructura o la agroindustria– se ven cada vez más silenciadas y amenazadas tanto por el Estado como por los actores privados.

En segundo lugar, está el impacto de la llamada "guerra contra el terrorismo". El Estudio Global de la ex relatora especial de la ONU Fionnuala Ni Aolain demuestra que los gobiernos suelen abusar de las medidas legislativas, financieras y de otro tipo para reprimir a quienes les desagradan, y que tales medidas no sólo las adoptan los regímenes autocráticos, sino también las democracias híbridas y plenas. Aunque las preocupaciones en materia de seguridad figuran entre las prioridades políticas de varios de los países latinoamericanos, con frecuencia se recurre al pretexto de la lucha contra el "terrorismo" (que en la región se ha definido para incluir al crimen organizado) y el blanqueo de capitales para reprimir a los movimientos y organizaciones sociales y debilitar los derechos fundamentales.

CRIMEN ORGANIZADO

América Latina es la región más violenta del mundo. Las políticas públicas de "mano dura", implementadas por gobiernos de derecha e izquierda, son muy populares entre la opinión pública, a pesar de su dudosa efectividad. Cada vez más estudios demuestran que el crimen organizado solo es posible con la tolerancia y cooperación de actores estatales ligados a fuerzas de seguridad e inteligencia. Por ello, para enfrentarlo son claves políticas públicas contra la impunidad estatal.

Estos factores se han visto agravados por una serie de cambios socioeconómicos y políticos ocurridos en las últimas décadas. Entre ellos cabe citar: la creciente demanda global por las materias primas; la legitimación del modelo

de desarrollo extractivista por parte de gobiernos tanto de izquierdas como de derechas y la consiguiente estigmatización de las comunidades, movimientos y organizaciones que se oponen a las actividades extractivas; las repercusiones de la pandemia de Covid-19, que agravó las desigualdades al tiempo que aumentaba la represión, restricción de libertades y la corrupción, la migración forzada interna y externa, y el aumento del uso de tecnología como medios de ataque o diseminación de falsas narrativas.

El resultado ha sido una mayor polarización económica y política, que ha abierto el camino a niveles récord de desigualdad, corrupción generalizada entre las élites de algunos países, impunidad ante violaciones de DDHH, "captura política" (captura del Estado por actores no estatales) que en muchos casos incorpora al sistema de justicia, y un espacio cívico con tendencia al cierre.

La conciencia de que el espacio de la sociedad civil es un "blanco móvil" –que el espacio puede abrirse para algunos, aunque se cierre para otros actores, a menudo más vulnerables, pone de relieve la necesidad de un análisis histórico político interseccional y de un abordaje cuidadoso y basado en la práctica.

¿QUÉ MECANISMOS SE UTILIZAN PARA CERRAR EL ESPACIO CÍVICO EN LA REGIÓN?

En América Latina se emplea una serie de mecanismos diferentes para reprimir el espacio cívico, implicando a actores poderosos –a menudo el Estado, pero también grandes empresas privadas y grupos del crimen organizado–, y el análisis revela ciertos elementos "consistentes y constantes".

Entre ellos se incluyen el uso de la estigmatización y la difamación, la criminalización del activismo o la protesta social, los ataques físicos o digitales, el uso indebido del sistema penal, la captura de los sistemas de justicia, o una combinación de los mecanismos descritos.

A continuación, se ofrece una lista no exhaustiva de los mecanismos más utilizados:

METODOS JURÍDICOS	**Legislativos:** Incluye tanto "leyes sobre ONGs" con términos vagos y un amplio alcance, a menudo citando al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como leyes sobre "agentes extranjeros" que otorgan amplios poderes e incluyen castigos "draconianos", a menudo citando la seguridad nacional, y otras leyes enfocadas en criminalizar acciones de defensa de derechos tales como plantones, publicaciones de críticas a funcionarios y otras. **Judiciales:** Criminalización, intimidación o acoso judicial, detenciones arbitrarias, acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés), sentencias injustas o desproporcionadas. **Administrativos:** Requisitos desproporcionados y onerosos a ONGs como el registro y la presentación de informes, pero también medidas específicas como la prohibición de viajar. Obstáculos a la organización de protestas. Obstáculos o prohibición de contacto con los mecanismos de DDHH. **Financieros:** Restricciones impuestas por el Estado y el sector privado a las fuentes o tipos de financiación, citando la lucha antiterrorista (GAFI) o contra el blanqueo de dinero; cierres de cuentas bancarias, sanciones y restricciones de donantes.
MÉTODOS TECNOLÓGICOS	**Directos:** Vigilancia, drones, software de reconocimiento facial, piratería informática, campañas de difamación en Internet, *doxxing* (hacer pública información privada o confidencial). **Indirectos:** Ralentizar o cortar el acceso a Internet, bloquear programas o aplicaciones específicas, restringir el acceso a las redes sociales.
MÉTODOS EXTRALEGALES	**Estigmatización:** Especialmente por parte de las autoridades hacia actores sociales individuales o sectores enteros, o grupos marginados dentro de la sociedad civil en general, con el fin de marginarlos y deslegitimarlos, justificando potencialmente medidas más extremas. **Activo:** Acoso, intimidación, amenazas, ataques violentos y ejecuciones extrajudiciales de defensores por parte de agentes estatales y no estatales, por separado o actuando de forma concertada. **Pasivo:** No responder a las denuncias y delitos, no promulgar la legislación adecuada o no hacer cumplir las leyes existentes. Corrupción en los sistemas de justicia e impunidad generalizada ante los ataques contra la sociedad civil.

Cortesía ChakanaNews

Del Paro en Ecuador al triunfo del NO

Alejandra Santillana Ortiz
Socióloga. Parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador y del colectivo YASunidos

El 22 de octubre Marlon Vargas, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, anunciaba el fin de un paro que duró 31 días, que es hoy por hoy el paro más largo registrado en la historia reciente del país[1] y que tuvo como epicentro de las protestas a la provincia de Imbabura al norte del país.

Recordemos que una de las razones para llamar a parar, quizás la que detona de manera más evidente lo ocurrido, es la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que como sostiene el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico de la Universidad Central del Ecuador, constituye un efecto cascada en el conjunto de la economía dolarizada del país, porque encarece los costos trasladándolos a los pequeños y medianos productores así como a los consumidores, a la par que restringe derechos básicos de las familias ecuatorianas, sobre todo de sectores populares y medios como por ejemplo, la posibilidad real de que cubran con sus ingresos el costo de la canasta básica.[2]

Sin embargo, como lxs propixs manifestantes visibilizaron esa fue "la gota que derramó el vaso" y con el pasar de los días, el paro se convirtió en una forma que aglutinaba múltiples razones que evidenciaban el hartazgo, el cuestionamiento y la oposición a las políticas neoliberales, el entreguismo al FMI, el abandono al campesinado, el recorte de inversión social y la violencia del gobierno.

Y es que más allá de los cuestionamientos de las comunidades y organizaciones sobre la decisión inconsulta de finalizar el paro por parte de la dirigencia actual de la Conaie; la protesta prolongada evidencia tres elementos: 1) las consecuencias para el campo popular organizado de que el gobierno de Noboa haya anunciado el 10 de enero de 2024, la existencia de un "conflicto armado interno" que dio paso a la ejecución de un –hasta ahora inexistente– Plan Fénix, y con ello la militarización de varias provincias de la costa ecuatoriana; 2) el carácter de dominación, racista, antidemocrático y violento del regimen como forma de aplicación del ajuste estructural que ha utilizado la narrrariva del terrorismo para estigmatizar a quienes protestan; y 3) la forma social que adoptó el paro en ese contexto.[3]

La ocupación de las Fuerzas Armadas de Esmeraldas, Guayaquil y Manabí para "controlar y erradicar el crimen organizado", así como su presencia en territorios donde el Estado ha dado luz verde a empresas mineras y de intensa conflictividad con la población local que se opone a la instalación de la minería; evidenciaban ya el riesgo de considerar la militarización como una salida para resolver la crisis de seguridad en el país. En esa medida, la respuesta militar del gobierno frente a la protesta social, tuvo sin duda un alto costo para las comunidades que salieron a cerrar vías, convocar a marchas y llamar a plantones: la persistencia inconstitucional de decretar estados de excepción en las provincias donde se anunciaron movilizaciones; así como las denuncias realizadas por la Alianza por los Derechos Humanos que documentó en su informe del 23 de octubre:[4] 391 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 2 personas fallecidas (los comuneros Efraín Fuerez y José Guamán),[5] 473 personas heridas, 16 desapariciones de corta duración[6] y 206 detenciones.

A esto se suman las alertas que tanto Amnistía Internacional (3 de octubre de 2025)[7] como Human Watch Rights (21 de octubre de 2025)[8] emitieron sobre la represión del paro, la ausencia de independencia judicial[9] y las 43 desapariciones forzadas desde 2023 en manos de los militares,[10] las restricciones a la libertad de reunión, el despliegue militar y el uso excesivo de la fuerza. Así mismo podemos observar las distintas denuncias que han realizado proyectos como Runas Archive que para el 26 de octubre evidenciaban en un mapa georeferenciado la presencia de Fuerzas Armadas y policías en la ciudad de Otavalo en Imbabura, que como sostienen, constituye una "ocupación de calles y ciudadelas, queriendo ingresar al corazón" de la ciudad.[11] Solo en Quito, capital del Ecuador, el día 13 de octubre se desplazaron para la marcha pacífica anunciada por organizaciones sociales del sur de la ciudad, incluida la Coordinadora de Pueblos Indígenas en Quito, COIQ, el abrumador número de 7 mil militares y 6 mil policías. Mientras tanto el país cerraba septiembre de 2025 con "6.797 muertes violentas y si la media se mantiene, a finales de año esta cifra podría superar los 9.000 asesinatos y la tasa de muertes violentas sobrepasar los 50 casos por cada 100.000 habitantes".[12] Como sostiene la periodista argentina Camila Parodi, "las organizaciones de derechos humanos y los medios comunitarios han documentado ingresos forzados a viviendas, uso de armas letales en la represión, allanamientos arbitrarios y detenciones indiscriminadas".[13] O la denuncia presentada por el colectivo YASunidos sobre la presión y amedrentamiento a personal médico en Imbabura para que denuncien a las personas que llegaban heridas a los centros de salud a raíz de la protesta.[14]

Como podemos ver, no hay evidencia científica que demuestre que la estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico y a las bandas criminales que controlan y se reparten territorios, haya sido efectiva; mientras que en cambio existen, como hemos demostrado, suficiente información documentada que devela cómo esto ha servido en este caso para aplacar la protesta social violando una serie de derechos, por ejemplo el derecho a la resistencia tipificado en el artículo 98 de la Constitución actual. La situación empeoró cuando durante el paro decenas de defensores de derechos y dirigentes revelaron el congelamiento y bloqueo de sus cuentas bancarias sin ningún tipo de notificación oficial o norma que habilite esta decisión tomada por los bancos pero con el visto bueno del Estado ecuatoriano.

Sin duda, la materialización de estrategias aplicadas de manera persistente en otros países como Perú, para deslegitimar, estigmatizar y judicializar a quienes ejercen la resistencia han sido ya incorporadas al gobierno de Noboa. El terruqueo, término usado por los diferentes gobiernos peruanos desde la dictadura de Fujimori en 1992 para "convertir" en terroristas a manifestantes, defensorxs de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas, intelectuales, estudiantes y hasta ongs, que cuestionan el programa extractivista neoliberal o el mismo status quo de la dinámica política; ha llegado al Ecuador como política gubernamental. Desde el inicio del paro, el presidente, su vicepresidenta María José Pinto, varios ministros (de Defensa y del Interior), gobernadores (de la provincia del Guayas) y la propia vocera, Carolina Jaramillo establecieron vínculos sin pruebas entre los comuneros, pueblos y nacionalidades y grupos terroristas.[15] Esta estrategia vino acompañada de prácticas sistemáticas de racismo y xenofobia (población venezolana) y narrativas falsas e incompletas

No hay evidencia científica que demuestre que la estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico y a las bandas criminales que controlan y se reparten territorios, haya sido efectiva

que buscaron generar una opinión pública adversa al paro, en donde se evidenciaban "las estructuras racistas que condicionan el acceso a derechos, la visibilidad de los pueblos indígenas y la forma de tratar sus protestas. La insistencia en llamarlos "terroristas" o "delincuentes", el trato diferenciado, la represión selectiva, todo ello forma parte de una lógica que invisibiliza la plurinacionalidad concreta del Estado y reproduce jerarquías étnicas".[16] Es así que como sostiene la socióloga Gabiela Borja, la operación del gobierno y los medios de comunicación fue asociar la identidad indígena con actos de violencia, como si ser indígena fuera igual a ser violento.[17]

La plataforma de fast checking y análisis, Lupa Media presentó un contundente informe sobre la deliberada manera en que se construyeron noticias falsas durante el paro: se verificaron 92 piezas de desinformación,[18] de las cuales "38 casos de contenido fueron completamente falsos, destinados a saturar el ecosistema informativo, 25 casos de rumores y 3 de opinión, diseñados para generar desconfianza e incertidumbre al llenar vacíos informativos con especulación", en donde la mayoría de estos casos tuvieron como formato el video. Al menos 24 piezas correspondieron a eventos anteriores o internacionales, hubo además suplantación de identidad, distorsión de contenido genuino y fabricación total de videos a través de IA cuyo objetivo fue deslegitimar a los actores sociales en paro y criminalizar la protesta social.

Este paro fue una expresión colectiva que surgió desde abajo, desde las comunas, descentralizado, mayoritariamente rural pero también urbano (sobretodo en Quito), crítico de las dirigencias nacionales y regionales, creativo y de construcción de liderazgos colectivos sobretodo de mujeres y jóvenes indígenas.[19] Porque en esos 31 días, y frente a la opacidad de la propia dirigencia actual de la Conaie, la debilidad de las izquierdas tradicionales y la ausencia del progresismo en las calles; no solo se levantaron las comunidades campesinas si no también existió un despliegue de iniciativas populares y urbanas que fueron desde asambleas ampliadas,[20] sostenimiento de centros de acopio para enviar medicinas y productos no perecibles para Imbabura y comunas de Pichincha, marchas lideradas por feministas, mujeres y disidencias, movilizaciones estudiantiles, plantones artísticos y despliegue gráfico, así como un estratégico diálogo entre formas organizativas urbanas y dirigencias locales de mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades.[21] Este paro a diferencia de los anteriores levantamientos cuyo eje giraba en torno a la dirección política de la Conaie y la presencia de los pueblos indígenas en Quito, desplazó las decisiones políticas y estratégicas a una diversidad de actores que politizaron desde el cuidado como forma de rebeldía hasta la creatividad popular que apuntaba a desmontar los imaginarios racistas y ultraviolentos del régimen de Noboa.

Con este paro se evidencia que Noboa busca "instituir la lucha en contra de la izquierda [...], en un elaborado entramado de una presunta estructura internacional de alianza narcoterrorista contra el progreso de América Latina" (Revista Crisis). Pero aún más grave, se perfila la intención de asfixiar toda posibilidad de protesta social en el país, sobretodo en el arrinconamiento del movimiento indígena y de esta manera allanar el camino para materializar un proyecto de dominación neoliberal que tiene como centro el extractivismo y que como hemos visto en otras experiencias latinoamericanas, confluye con los propios intereses del capital ilegal.

Queda aún pendiente el debate y la autocrítica a la interna del propio campo popular organizado del Ecuador, que nuevamente tuvo que desplazar esa urgencia de revisar lo ocurrido, porque tuvo que pasar casi inmediatamente a enfrentar un nuevo escenario electoral: la consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Noboa el pasado 16 de noviembre en donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo con la instalación de bases militares extranjeras, financiamiento público a partidos políticos, disminuir el número de asambleístas y sobretodo si aprobaba o no el paso a una Asamblea Constituyente cuyo

Cortesía ChakanaNews

objetivo era desmantelar la Constitución aprobada en plebiscito en el año 2008 y que es sin duda una de las cartas magnas más garantistas y de vanguardia a nivel mundial, porque reconoce entre otros elementos la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, la democracia directa, el trabajo no remunerado como generador de riqueza, la prohibición de transgénicos, el agua como derecho humano y la soberanía alimentaria como objetivo estratégico.

Ese mismo tejido que se articuló en el paro, pueblos y nacionalidades, ecologistas populares, feministas, disidencias, jóvenes y estudiantes, medios comunitarios, campesinxs, sumado a una serie de iniciativas de artistas, investigadorxs, docentes, gestorxs culturales, un progresismo por momentos de bajo perfil, cierto sindicalismo, una parte de la izquierda institucional electoral, desplegaron durante semanas iniciativas diversas para hacer de la campaña por el No, una opción orgánica y sistemática, pedagógica y creativa, popular, territorial y en redes.

Por su parte el Si, tuvo al gobierno, sus funcionarios y medios hegemónicos como actores principales, actores que no tuvieron ningún reparo en usar espacios y recursos públicos y multimillonarias cifras del mundo del capital privado, para impulsar la consulta; a ellos se sumaron las cámaras de la producción y comercio, las empresas mineras, influencers pagados, y las derechas tradicionales que creyeron que la narrativa del miedo y la culpabilización a la Constitución como origen todos los males del Ecuador, eran garantía de triunfo.

El domingo 16 de noviembre el No se impuso en las cuatro preguntas: sobre bases militares extranjeras gana con 60,82%, sobre eliminación a financiamiento estatal de partidos políticos con 58,3%, sobre disminución del número de asambleístas con 53,7%, y finalmente sobre constituyente el No alcanza el 61,8%.[22] Este triunfo del tejido social y que significa el primer golpe político nacional para el gobierno de Noboa, evidencia que "la pérdida fue uniforme en todo el electorado, incluyendo los segmentos en los que Daniel Noboa normalmente recibe fuerte apoyo electoral".[23]

Las razones para que un enorme electorado se haya pronunciado por el No, son todavía hipótesis y pistas que requieren mayor profundidad y tiempo. Sin embargo, podemos decir a la luz del sentido de la campaña del No y con información estadística sobre lo que valora la sociedad ecuatoriana[24] que "pese a las múltiples crisis que atraviesa el país, la victoria del No dejó claro que ideas y conceptos como democracia, soberanía, derechos humanos y medio ambiente siguen teniendo un valor central para los ecuatorianos".[25] En efecto, la defensa de la naturaleza como el mayor consenso nacional, un antiimperialismo popular, el paro y la respuesta del gobierno, son entre otros factores, sentidos que se despliegan en esta victoria; pero que todavía no explican este No que nos tomó por sorpresa.

Lamentablemente, el presidente Noboa mantiene su proyecto sin mayores modificaciones. Varias han sido las señales de estos primeros días: la ausencia de declaraciones del presidente, su viaje express a Estados Unidos, un fallido y mediocre cambio de gabinete, el mantenimiento del acuerdo con el FMI y la persistencia de la militarización. Mientras para el primer trimestre del 2026 se vislumbra un nuevo escenario

de conflictividad ligado al incremento de los precios de transporte y de los costos de vida en el país. Le queda al campo popular organizado, al tejido social que se volvió corazón de la campaña en esta consulta, transformar ese No: levantar una fuerza social y construir un proyecto político que sea en definitiva una alternativa para el país.

Notas:

1. https://www.tiktok.com/@radiopichincha/video/7564096456987053330
2. https://www.instagram.com/p/DPMc-bKgCaK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DPMiGCeAINT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
3. Es importante señalar que la mayoría de los análisis y reflexiones situadas sobre el #ParoEcuador2025 han sido escritos o relatados por mujeres y disidencias que con una enorme capacidad de síntesis y de comprensión sobre el carácter de la protesta, han logrado que lo que difundan los medios comunitarios y alternativos, sea una especie de praxis donde se combinan el que hacer situado en el paro y el contorno de lo que se juega en este escenario.
4. Alianza por los Derechos Humanos. "31 días del Paro Nacional en Ecuador 2025 – Monitoreo de vulneraciones de DDHH". Disponible en: https://alianzaddhh.org/31-dias-del-paro-nacional-en-ecuador-2025-monitoreo-de-vulneraciones-de-ddhh/
5. Aunque la Alianza reporta dos fallecidos producto del impacto directo del uso de la fuerza estatal, hay también el deceso de Rosa Paqui, una comunera saraguro del sur del país, que muere asfixiada por las bombas lacrimógenas utilizadas por el Estado.
6. Este término se refiere a "personas que desaparecen en el marco de la represión policial o militar, que no son puestas a órdenes de una autoridad competente ni llevadas a recintos autorizados".
7. Amnistía Internacional. 3 de octubre de 2025. "Ecuador: Alerta por represión a protestas, independencia judicial y desapariciones forzadas". Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/10/ecuador-alerta-por-represion-a-protestas-independencia-judicial-y-desapariciones-forzadas/
8. https://www.hrw.org/es/news/2025/10/21/ecuador-abusos-en-la-respuesta-a-las-protestas
9. https://elpais.com/america/2025-08-17/el-gobierno-de-noboa-declara-enemiga-del-pueblo-a-la-corte-constitucional-de-ecuador.html
10. Informe "Son militares, yo los vi" presentado el 22 de septiembre de 2025: "La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto "conflicto armado interno" para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo". Disponible: https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/0258/2025/es/
11. Disponible en: https://www.instagram.com/p/DQSLv-vETIq/?utm_source=ig_web_copy_link
12. https://www.primicias.ec/seguridad/muertes-violentas-ecuador-2025-violencia-record-107712/
13. Parodi, Camila. 23 de octubre de 2025. "Ecuador: cinco claves para entender el paro nacional". Disponible en: https://latfem.org/ecuador-cinco-claves-para-entender-el-paro-nacional/
O por ejemplo los testimonios realizados por Revista Crisis, https://www.revistacrisis.com/ en visita a comunidades de Otavalo el día viernes 24 de octubre de 2025. Existen denuncias de población local a medios comunitarios, de que funcionarios públicos del Ministerio de Salud Pública entras con personal de las Fuerzas Armadas a las comunidades con el argumento de realizar levantamiento de datos, pero que en realidad lo que están haciendo es intimidar a la población que tiene miedo porque consideran que es posible que existan detenciones y de esta manera controlar que no vuelvan a protestar.
14. https://x.com/Yasunidos/status/1981456813015842932
15. https://www.expreso.ec/actualidad/gobernador-sugiere-vinculo-de-manifestantes-indigenas-con-la-explosion-en-guayaquil-260814.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/daniel-noboa-confirma-presencia-miembros-tren-aragua-paro/
Como estableció la sentencia judicial sobre las 13 personas que se encontraban detenidas hasta el 24 de octubre, 12 de Otavalo y 1 ciudadano venezolano, no existió evidencia alguna de que tuvieran algún tipo de participación en el ataque a una estación de policía en Imbabura o sostuvieran vínculos con el Tren de Aragua.
16. Ruiz, Gabriela. 12 de octubre de 2025. "Leer al Paro Nacional del Ecuador en clave de 'racismo'". Disponible en: https://piedepagina.mx/leer-al-paro-nacional-del-ecuador-en-clave-de-racismo/
17. Borja, Gabriela. 24 de octubre de 2025. "Paro nacional en Ecuador: racismo, provocación y violencia, estrategias de un Estado autoritario". Disponible en: https://latinta.com.ar/2025/10/24/paro-nacional-ecuador-racismo-provocacion-violencia-estrategias-gobierno-autoritario/?utm_campaign=linkinbio&utm_medium=referral&utm_source=later-linkinbio
18. De estas piezas, "67 fueron revisadas mediante el servicio "Verificación a la Carta", con el objetivo de identificar narrativas falsas y contenidos manipulados que circularon en redes sociales". Disponible en: https://lupa.com.ec/explicativos/balance-paro-nacional/
19. La dignidad del Comité Central de Mujeres de la Unorcac y la presidenta de esta organización, Martha Túquerres; el sistema de participación de Cotacachi que facilitó la toma de decisiones orgánica sostenida en manos de mujeres; las ollas populares y comunitarias; la vicepresidencia del pueblo Kayambi, Denisse de la Cruz; lxs jóvenes y mujeres de San Miguel del Común; la recuperación desde debajo de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, Fici; así como un sin número de dirigencias locales colectivas que fueron centrales para sostener por tantos días el paro. Un ejemplo puede oirse en este episodio elaborado por Claudia Korol y Liliana Daunes: https://open.spotify.com/episode/2NccmuZJIKkZJCBewPDRit?si=AsrKlJhpRlCBiqDnqGD1sQ
20. Un ejemplo es la asamblea que se sostuvo durante 12 semanas en la ciudad de Quito, en distintos espacios de la ciudad, a donde asistieron feministas, ecologistas, estudiantes, jubiladxs, artistas, colectivos de jóvenes, transeúntes de la clase trabajadora, medios comunitarios.
21. https://www.instagram.com/p/DQR0gjqgCK-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
22. https://resultadoscp2025.cne.gob.ec/
23. https://lapartehonda.substack.com/p/el-titular-mas-importante-despues
24. Encuesta con 95% de confianza de IPSE: https://ipse.global/pdf/IPSE-Ecuador_encuesta_consulta_popular_2025-10-Oct.pdf
25. https://labarraespaciadora.com/victoria-del-no/

MEMORIA 2024

2024: RESISTENCIAS QUE SOSTIENEN LA VIDA. FEMINISMOS, SOBERANÍAS Y LUCHAS POR LA JUSTICIA GLOBAL

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2024?

Más de 200 actividades de educación, sensibilización e incidencia feminista, ecosocial y antirracista impulsadas desde Entrepueblos en todo el territorio, con alianzas clave en América Latina y el Estado español. En este resumen recogemos los ejes centrales de nuestro trabajo en 2024: feminismos, defensa de los bienes comunes, derechos y justicia global, y cooperación transformadora. Desde las calles del 8M hasta las aulas, desde giras como la de YASunidos hasta publicaciones como Mujeres en Lucha, seguimos construyendo una comunicación que acompaña y fortalece las luchas de los pueblos.

Un año de ofensiva contra los derechos y apuesta colectiva por la vida 2024 ha sido un año marcado por una creciente ofensiva autoritaria, con retrocesos en derechos fundamentales, criminalización de la disidencia y fortalecimiento del poder corporativo en múltiples territorios. En ese contexto, nuestro trabajo ha buscado sostener alianzas, generar relatos de resistencia y apoyar procesos de transformación impulsados desde los movimientos populares. Desde la solidaridad internacionalista, el ecofeminismo y la justicia global, hemos reforzado las conexiones entre luchas locales y globales.

FEMINISMOS QUE SANAN Y RESISTEN

Durante 2024 apoyamos movilizaciones feministas en múltiples territorios, incluyendo Barcelona, Tarragona, Sevilla, Valencia, Madrid, Alacant, Palma y Murcia, con una presencia activa en las fechas emblemáticas del 8 de marzo y el 25 de noviembre. Estas acciones formaron parte de un trabajo sostenido de articulación con movimientos sociales feministas que luchan contra las violencias estructurales, exigen justicia reproductiva y defienden los cuerpos y territorios de las mujeres.

Nos sumamos a la declaración "Defensoras y Activistas por la Vida", en la que alzamos la voz contra el genocidio en Gaza y la represión hacia las defensoras de derechos humanos en contextos de conflicto. Además, facilitamos talleres de sanación feminista en espacios como Can Masdeu (Barcelona) y en territorios afectados por la DANA en Valencia, generando espacios seguros para la recuperación colectiva, el autocuidado y el fortalecimiento político-emocional de mujeres activistas.

Presentamos el informe de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) ***Datos que nos duelen, redes que nos salvan – 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)***, en colaboración con **IM-Defensoras**. Incluyó actos en Barcelona, Madrid, Basauri, Valencia y Petrer.

En el ámbito organizativo, colaboramos en el proceso de elaboración del II Plan de Igualdad de Entrepueblos y en el diagnóstico de cuidados institucionales junto al colectivo Fil a l'Agulla. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con una cultura interna basada en los cuidados, la corresponsabilidad y el bienestar de quienes sostienen la organización desde dentro.

En comunicación, editamos y difundimos el suplemento especial "Mujeres en Lucha" junto a La Directa, una publicación que articula narrativas ecofeministas desde los territorios en resistencia. Este trabajo comunicativo visibiliza las voces de mujeres indígenas, rurales, migrantes y activistas que defienden la vida frente al extractivismo, el racismo y el patriarcado.

A nivel internacional, fortalecimos vínculos con contrapartes feministas en América Latina, participamos activamente

Kadia

en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC) en El Salvador, y acompañamos procesos de defensoras de derechos humanos en contextos de riesgo. La articulación Sur-Sur y el aprendizaje mutuo siguen siendo una base clave de nuestra acción feminista internacionalista.

SOBERANÍAS Y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES

Durante 2024, nuestro trabajo en defensa de los bienes comunes se expresó en campañas, giras, materiales educativos y acciones de incidencia política. Participamos activamente en la vigilancia crítica de la directiva europea sobre debida diligencia, denunciando sus limitaciones para garantizar la responsabilidad efectiva de las empresas transnacionales. En este marco, impulsamos la creación del Centre Català d'Empreses i Drets Humans en el Parlament de Catalunya, una herramienta fundamental para exigir obligaciones públicas y privadas en el respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Acompañamos la gira internacional de YASunidos, colectivo ecuatoriano que lideró el proceso histórico de consulta popular para frenar el extractivismo en el Yasuní. La gira recorrió diversas ciudades del Estado español y articuló espacios de diálogo con colectivos ecologistas, feministas y de defensa del territorio. Fue una acción de sensibilización directa que acercó las luchas de América Latina a la ciudadanía europea, reforzando los lazos de solidaridad internacionalista. La gira recorrió Ginebra, Galicia, Madrid, Barcelona, València y Berlín.

Además, editamos materiales pedagógicos sobre justicia climática dirigidos a docentes y formadoras de espacios educativos formales y no formales. Estos recursos fomentan una comprensión crítica del cambio climático, el neocolonialismo y las falsas soluciones verdes, y proponen alternativas desde la agroecología, los ecofeminismos y las soberanías comunitarias.

Entre ellos destacan el documental *50 grados* y la exposición *Desplazamiento de las personas por causas ambientales*, utilizados en actividades realizadas en diversas ciudades.

En València, en el marco del *Proyecto Barrio* impulsado por el Museu de Prehistòria, organizamos la jornada "¿De qué hablamos cuando hablamos de emergencia climática?", con presentación de *50 grados*, una mesa redonda y la exposición, además de una entrevista en À Punt para visibilizar la jornada. En los IES Ramón Llull y del Carme, se realizaron talleres educativos como *Cuidemos el planeta* y sesiones sobre migraciones ambientales y gestión socioemocional frente a la crisis climática (¿Cómo reaccionamos a un clima que ya no será el que era? y *Gestión emocional, gestión de procesos y cuidado de las personas*).

En el País Vasco, estos materiales llegaron a Muskiz y Portugalete, donde también se realizó una entrevista en la radio local. La exposición fue editada también en Burgos y presentada en otros espacios educativos. En Barcelona, *50 grados* se proyectó en el Aula Ambiental del Raval, y en colaboración con Ecologistes en Acció, se celebró un pase en el cine Zumzeig. Como parte de esta misma línea, se organizó también el preestreno de *Mariposas Negras*, película que más tarde sería reconocida con los premios Gaudí y Goya a la mejor película de animación.

En este eje también destacamos la gira de Andrea Rivera, del Colectivo Madreselva (Guatemala), que permitió tejer vínculos entre las luchas por las soberanías energéticas en América Latina y los debates en nuestro territorio sobre modelos energéticos comunitarios. En Burgos, la visita se centró en visibilizar el proyecto de pequeñas hidroeléctricas comunitarias impulsado por Madreselva, conectándolo con experiencias locales alternativas. Se organizó el curso universitario *Camino de la luz*, dirigido a estudiantes y profesorado, y una reunión con colectivos ecologistas y cooperativas locales –entre ellos, Ecologistas en Acción y Energética–.

También se celebró una conferencia pública (presencial y online) con Andrea Rivera como ponente.

La gira incluyó otras paradas significativas: en la aldea de San Miguel (Valladolid), se celebró el coloquio *Mujeres en el mundo rural: derechos humanos, economía social y sostenibilidad*, junto al Ayuntamiento, FIARE Banca Ética y asociaciones locales. En València, se concertó una reunión de incidencia con la Generalitat. En la Universitat d'Alacant, Andrea participó en un encuentro de intercambio de saberes con colectivos sociales sobre transición ecosocial justa y acceso comunitario a energías renovables. En Maó, la actividad pública *El agua, fuente de vida y de conflictos* incluyó la proyección del documental *La sangre de la tierra* y un coloquio con la propia Andrea y su director, Félix Zurita. Finalmente, en Elx, se sumó a la charla *Energía renovable sin destrucción del medio ambiente*, reforzando el diálogo entre experiencias comunitarias y alternativas frente al extractivismo energético.

Nuestra acción en este eje incluyó también la participación en movilizaciones territoriales y campañas comunicativas contra proyectos extractivos, en defensa del agua y de la tierra, tanto en América Latina como en el Estado español. Desde la comarca de La Safor hasta el valle del Huasco, nos hemos sumado a procesos que ponen en el centro la autodeterminación de los pueblos.

DEFENSA DE DERECHOS Y JUSTICIA GLOBAL

En 2024 profundizamos nuestro trabajo en defensa de los derechos colectivos de los pueblos y las personas más vulnerables. Difundimos la exposición "Activistas por la vida" en Madrid, acompañada de actividades paralelas y la presentación de unidades didácticas para su uso en centros educativos y sociales. Esta exposición pone rostro a mujeres defensoras de derechos humanos y del territorio en Mesoamérica, que enfrentan la criminalización y la violencia estructural.

Facilitamos la gira del defensor guatemalteco Bernardo Caal, injustamente encarcelado por su lucha en defensa del río Cahabón frente a intereses hidroeléctricos. Su visita al Estado español permitió encuentros con colectivos de solidaridad, medios de comunicación y representantes institucionales, visibilizando la criminalización de las luchas indígenas y la impunidad empresarial transnacional, con actividades en Alicante, Valencia, Alaior (Menorca) y Barcelona.

Participamos en redes de incidencia por los derechos de las personas migrantes y contra el racismo estructural, con acciones desarrolladas principalmente en Barcelona y Madrid. Estas actividades incluyeron jornadas formativas, movilizaciones y colaboraciones con entidades que trabajan desde una mirada antirracista y decolonial.

A través de publicaciones como "Mujeres en Lucha" y colaboraciones en medios aliados (La Directa, El Salto, Pikara), amplificamos las voces de quienes resisten la exclusión, el despojo y la violencia institucional. Nuestro enfoque de comunicación política parte de las experiencias encarnadas de las comunidades y busca disputar el relato hegemónico desde abajo y en colectivo.

EDUCACIÓN EMANCIPADORA Y COOPERACIÓN SOLIDARIA

A lo largo del año, defendimos una cooperación solidaria, transformadora y feminista frente a los recortes promovidos por gobiernos autonómicos. Esta defensa incluyó acciones públicas, posicionamientos políticos y trabajo en red con organizaciones de cooperación que comparten nuestros principios.

Participamos en el proceso de elaboración de la Estrategia de Educación Transformadora, un documento clave para orientar políticas públicas que vinculen justicia social, derechos humanos y sostenibilidad ecológica desde una mirada crítica y pedagógica. También facilitamos espacios formativos como la VII Universitat de Tardor y el Seminario de Geopolítica en la Universitat d'Alacant, donde compartimos experiencias desde una pedagogía popular.

Organizamos actividades de sensibilización y acogida juvenil en centros educativos de secundaria en València, Alacant y El Campello. Estas acciones acercaron a las nuevas generaciones debates actuales sobre feminismos, justicia ecosocial y solidaridad internacionalista, combinando metodologías participativas, narrativas transformadoras y trabajo en red con profesorado comprometido.

COMUNICACIÓN VIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN

Nuestra web sigue siendo un archivo vivo de actividades, publicaciones y campañas, ahora en proceso de renovación técnica y visual. Tras más de seis años de recorrido, en 2024 dimos inicio a un cambio integral que culminará en 2025, para consolidar la web como espacio de referencia política, educativa y de archivo histórico de Entrepueblos. Este proceso ha sido acompañado con criterios de accesibilidad, feminismo digital y participación.

Las redes sociales se consolidan como herramientas clave para la incidencia política y el acompañamiento cotidiano a luchas feministas, ecosociales y antirracistas. En ellas compartimos noticias, alertas, convocatorias, materiales y reflexiones que alimentan una cultura comunicativa descentralizada y viva.

Editamos el libro "Activistas por la vida" y materiales pedagógicos sobre ecofeminismos y justicia climática. Estos contenidos fortalecen los procesos de formación y visibilización de alternativas, integrando el relato de las comunidades como hilo conductor.

Articulamos campañas con fuerte carga narrativa para visibilizar resistencias, generando relatos que suman a una cultura de transformación social. Nuestra apuesta comunicativa se inspira en una mirada ética, colectiva y profundamente comprometida con las luchas emancipadoras.

DATOS E IMPACTOS DE NUESTRA ACCIÓN

PROYECTOS EJECUTADOS 2024: COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN EMANCIPADORA EN AMÉRICA LATINA Y EL ESTADO ESPAÑOL

CENTROAMÉRICA	270.564,46
Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación como un espacio de información comunitaria en la región (Fase II). Fundación Luciérnaga, Red Centroamericana de comunicación	27.417,72
Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación como un espacio de información comunitaria en la región (Fase III). Fundación Luciérnaga, Red Centroamericana de comunicación	21.764,18
Protección integral de defensores y defensoras de DDHH en contextos de criminilización creciente en América Central. CUC y CDM, Centro de derechos de la mujer	221.382,56

CUBA	35.189,40
Mujeres y sostenibilidad de la vida desde el movimiento social popular en Cuba. GALFISA	23.517,40
Políticas públicas y liderazgo feminista de mujeres en La Habana. GALFISA	11.672,00

EL SALVADOR	392.889,85
Desarrollo productivo sostenible agroecológico en cooperativas agropecuarias del corredor seco de El Salvador, para reducir los impactos del cambio climático, del COVID-19 y las brechas de género. CONFRAS	55.427,97
Impulsar el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres emprendedoras de dos municipios de San Salvador. MAM	1.454,42
Mujeres, juventudes y personas LGTBI+, por el derecho a una vida libre de violencias y acceso a medios de reactivación económica para fomentar el desarrollo humano sostenible, en 9 municipios de la zona oriental de El Salvador. La Colectiva	110.829,82
Promoviendo el empoderamiento organizativo y económico de mujeres rurales del municipio de Suchitoto en la búsqueda del desarrollo sostenible y equitativo. El Salvador. CRIPDES	36.262,38
Desarrollando capacidades en comunidades vulnerables, para la seguridad alimentaria, la autonomía de mujeres y la gestión ambiental. MOVIAC	5.207,10
Promoviendo la justicia hídrica con enfoque de género en el sector rural de Suchitoto, Cuscatlán, a través del fortalecimiento de los sistemas autogestionados comunitarios de agua. CRIPDES	41.494,00
Promoviendo la resiliencia de las cooperativas agropecuarias del corredor seco para fortalecer la igualdad de género, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. CONFRAS	106.584,93
Transporte Escolar en el Bajo Lempa. Comunidad Nueva Esperanza	9.443,11
Contribuyendo a la mitigación de los impactos del Cambio Climático y la construcción de territorios sostenibles con participación comunitaria en El Salvador. MOVIAC	26.186,12

GUATEMALA	355.379,09
86 comunidades mayas q'eqchies por la defensa de sus bienes naturales en Guatemala. MADRESELVA	22.178,32
Promover el fortalecimiento organizativo de 86 comunidades mayas q´eqchíes para la defensa de sus derechos ambientales y el uso sostenible de los bienes naturales, desde un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. MADRESELVA	41.454,33
Consolidar el liderazgo político de las mujeres Mayas organizadas para la incidencia en defensa del derecho y la dignificación de su calidad de vida, en el contexto de la pandemia COVID-19. Guatemala. CONAVIGUA	174.940,96
Fortalecer el Sistema Indígena-intercultural de aprendizajes y estudios como un espacio de formación-acción de jóvenes, mujeres y hombres, de las comunidades indígenas y de las organizaciones sociales de Chiapas desde la práctica de la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Fase II. CIDECI - Unitierra	6.856,20
Generar condiciones que contribuyan a la mitigación y prevención de las violencias contra las mujeres y la niñez maya. Kaqlá	85.207,78
Contribuyendo a la autonomía integral de las mujeres indígenas campesinas de las regiones Kaibil Balam-Huehuetenango y Mateo López Calvo-Quiché. CUC	1.444,26
Protegiendo bosques y agua: generación hidroeléctrica en Unillá Pacalá. Madreselva	23.297,24

PROYECTOS EJECUTADOS 2024 (cont.)

ECUADOR	694.151,51
Fortaleciendo a las mujeres defensoras y los procesos de resistencia como camino hacia la protección integral. ACCION ECOLÓGICA	151.661,10
Gobernanza y sostenibilidad de los agroecosistemas y recursos ambientales, basado en relaciones justas y equitativas, en la costa sur del Ecuador. MCCH ASOCIACIÓN MAQUITA	3.242,80
Pueblos indígenas del Ecuador construyen el Sumak Kawsay desde el empoderamiento de las mujeres indígenas y la defensa de los derechos colectivos.Ecuador, Amazonía. CONFENIAE, MICC, ECUARUNARI, CONAICE, OMICSE. CONAIE	112.853,90
Consolidando un modelo de desarrollo socio económico local basado en relaciones justas, equitativas y ambientalmente sostenibles. Guayas-Ecuador. MCCH	156.357,45
Mujeres, pueblos indígenas y colonos defienden los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza ante la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana. UDAPT	39.131,55
Vivas y Libres nos queremos: acompañamiento feminista para favorecer el acceso a la Justicia y a los derechos reproductivos de mujeres y niñas. SURKUNA	48.525,03
Mujeres defensoras, pueblos indígenas y afros y sociedad civil organizados para la exigencia de los Derechos Humanos, Colectivos y de la Naturaleza. Acción Ecológica	126.392,55
Fortaleciendo el tejido social y organizativo con enfoque de género y ambiental del Sistema de participación cantonal de Cotacachi, Ecuador. AUCC	55.213,46
Pueblos indígenas y campesinos fortalecen su gobernanza territorial, exigibilidad de derechos y protección de defensores y defensoras de la Naturaleza con liderazgo de mujeres y jóvenes. UDAPT, MICC, OMICSE	710,67
Mujeres organizadas defienden sus derechos y promueven la economía social y solidaria, con enfoque de sostenibilidad ambiental e interculturalidad en Cotacachi. AUCC	63,00

PERÚ	992.805,50
Mujeres y personas LGTB tejiendo redes para una justicia de género en Perú. DEMUS	17.430,18
Comunidades campesinas, organizaciones y personas defensoras de los DHA promueven iniciativas y alianzas para el ejercicio de derechos, la protección ambiental y la construcción de alternativas sostenibles en territorios afectados por actividades extractivas en Perú. GRUFIDES, Red Muqui	188.032,11
Movimiento feminista articulado para la restitución y posicionamiento de los derechos de las mujeres niñas y adolescentes aportando al desarrollo territorial del sistema de prevención de las violencias y cuidados desde un enfoque feminista, interseccional y transformador que ponga la vida "digna" en el centro. FARMAMUNDI, DEMUS Y FLORA TRISTAN	276.705,09
Mujeres organizadas y diversas defienden sus cuerpos y territorios de la violencia estructural impulsando prácticas y políticas para el ejercicio y exigibilidad de sus derechos en Cusco y Apurímac. Perú, en las regiones del Sur Andino que conforman el Corredor Minero del Sur – Cusco y Apurímac. DHSF, APDRODEH	248.428,19
MAP – Movilízate, Articula, Participa. Organizaciones y redes de mujeres promueven la igualdad y la prevención primaria de la violencia de género en Perú. DEMUS	3.146,49
Derecho a defender derechos en Perú -Protección de defensores/as en Perú. CNNDDHH	89.586,17
Construyendo movimiento y ciudadanía ambiental e indígena para la defensa y ejercicio de derechos en el Perú. Cooperacción	169.477,27

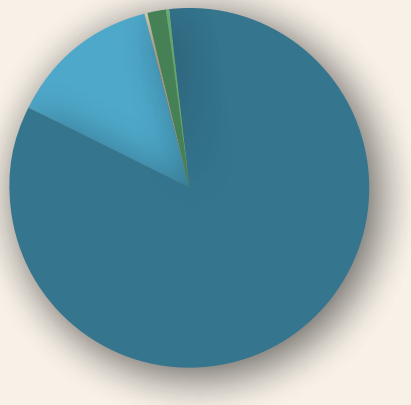
EDUCACIÓN EMANCIPADORA	303.178,70
Defendamos la sostenibilidad de la vida! Defensoras de DDHH promoviendo alternativas ecosociales ante las crisis interconectadas	7.198,30
Enredando resistencias por la defensa de los bienes comunes que pongan la vida en el centro	12.927,80
Tejemos alternativas ecofeministas por una incidencia ciudadana transformadora interconectando Sur y Norte. Caminando hacia un modelo arraigado en los territorios, feminista, social y ambientalmente sostenible (bianual)	106.521,61
Políticas públicas para desprecarizar las cadenas globales de los cuidados (bianual)	1.367,30
X Jornadas Valladolid con Palestina y contra el Apartheid de Israel (BDS)	2.402,90
Ciudadanía global comprometida con la agenda 2030, el desarrollo humano y medioambiental sostenible y los valores de la Unión Europea en la ciudad de Madrid a través de la formación y la sensibilización para la sostenibilidad de la vida.	32.794,44
Acción por el clima: Ciudadanía global comprometida con el desarrollo humano y medioambiental sostenible en Menorca a través de la formación y la sensibilización para la sostenibilidad de la vida	5.400,00
Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (PCPDDH) 2023-2024	16.999,93
Campaña de nuevos socios y socias y plan de cuidados y fortalecimiento de la vida activista en Entrepobles	4.897,96
Ciudades vivibles y feministas: construyendo una ciudad cuidadora y de acogida	24.916,18
Cuidando el planeta: Juventud y ciudadanía valenciana movilizadas por la justicia ambiental y la transición ecosocial	20.126,64
¡Caminamos juntas hacia las transiciones ecosociales! Por un cambio de paradigma glocal que promueva las economías feministas y transformadoras	33.680,42
Migraciones climáticas	181,50
Migraciones ambientales, comunidades expulsadas y resistencias en común	8.155,10
Tiempo de acción social y política: ¡hacia un pacto global de transición ecosocial!	25.608,62

Fuente: documento de proyectos 2024 *Valores en euros*

BALANCE ECONÓMICO

INGRESOS Y GASTOS DISTRIBUIDOS ENTRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN INTERNA

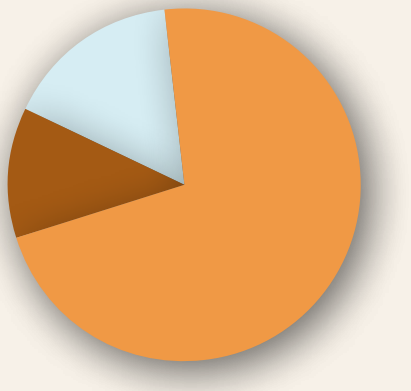
Distribución de ingresos



Cuotas socios/as		**93.558,98**
Cuotas socios/as	2,06%	73.094,33
Donaciones	0,58%	20.464,65
Subvenciones a proyectos		**3.047.813,70**
Ingresos por subvenciones a proyectos	85,84%	3.047.813,70
Subvenciones a estructura		**407.341,79**
Ingresos por subvenciones a estructura	11,47%	407.341,79
Ingresos financieros		**1.855,71**
Ingresos financieros	0,05%	1.855,71
Total		**3.550.570,18**

Valores en euros

Distribución de gastos



Gastos a proyectos de desarrollo	76%	2.716.452,77
Gastos a proyectos de sensibilización	10%	341.656,00
Gastos de administración y funcionamiento	15%	528.838,88
Total		**3.586.947,65**

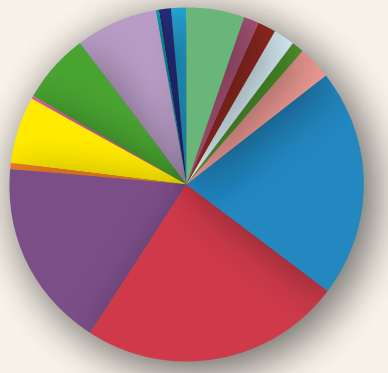
Valores en euros

Fuente: balance económico 2024

BASE SOCIAL

1.400 personas socias activas a cierre de año

Porcentaje por comunidades autónomas



Andalucía	4,64%	Otros países	0,50%
Aragón	1,21%	Extremadura	0,14%
Asturias	1,29%	Galícia	5,86%
Illes Balears	2,14%	Islas Canarias	0,29%
Cantabria	1,00%	Madrid	6,43%
Castilla la Mancha	3,21%	Murcia	7,64%
Castilla y León	20,36%	Navarra	0,29%
Catalunya	24,07%	La Rioja	1,07%
País Valencià	18,21%	Euskal Herria	1,64%

Fuente: listado de socias a 31/12/2024

FINANCIACIÓN A PROYECTOS

Visualización por territorios y líneas estratégicas

PAÍS	TITULO	CONTRAPARTE	FINANCIADOR	IMPORTE
El Salvador	Contribuyendo a la mitigación de los impactos del Cambio Climático y la construcción de territorios sostenibles con participación comunitaria en El Salvador	MOVIAC (Movimiento de Víctimas, Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones) en colaboración con el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)	Fons Menorquí de Cooperació	70.000,00
	Mujeres emprendedoras luchando por sus derechos y su autonomía económica	Asociación Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes" (MAM)	Ajuntament de Barcelona	75.640,00
	Mujeres y juventudes construyendo alianzas por una vida libre de violencias para las mujeres	Colectiva feminista LAS DIGNAS, en articulación con Red VLV y Red Juvenacción	Ajuntament de Tarragona	35.934,04
			Ajuntament de València	60.000,00
	Transporte escolar al Bajo Lempa	Comunidad Nueva Esperanza	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), Ajuntament de La Garriga	10.937,42
	Impulsando la defensa de los derechos humanos frente a las diferentes crisis socioambientales en El Salvador	Movimiento de Víctimas, Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), en colaboración con el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)	Ayuntamiento de Burgos	27.096,14
Chiapas	Fortalecer el Sistema indígena-intercultural de aprendizajes y estudios como un espacio de formación-acción de jóvenes, mujeres y hombres, de las comunidades indígenas y de las organizaciones sociales de Chiapas desde la práctica de la equidad de género y la sostenibilidad ambiental.	CIDECI - UNITIERRA	Ayuntamiento de Murcia	10.607,67
Perú	Fortaleciendo redes feministas y LGTQ+ para una agenda nacional por el derecho a decidir y la autonomía sexual y reproductiva en Perú	DEMUS APRODEH	Gobierno Vasco	582.124,77
Centroamérica	Impulso a la comunicación comunitaria en la región centroamericana	FUNDAERIC - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Honduras)	Ajuntament Santa Coloma Gramenet (FCCD)	10.016,06
			Ajuntament Castellar del Vallés	14.856,63
			Ajuntament de Vilafranca del Penedès (FCCD)	15.099,03
	Organizaciones aliadas inciden en un ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos en América Central (El Salvador-Honduras-Nicaragua)	Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, Red contra la Violencia Choluteca. En agrupación con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)	492.380,00
Guatemala	Protegiendo bosques y agua: generación hidroeléctrica en Unillá Pacalá	Colectivo MadreSelva	Govern Balear	125.000,00
	Empoderamiento político y autonomía económica de mujeres indígenas y campesinas	C.U.C.G - Consejo de Unidad Campesina de Guatemala	Ayuntamiento de Getxo	30.000,00
Cuba	Políticas públicas y liderazgo feminista de mujeres en La Habana	GALFISA	Ajuntament de Barcelona	86.000,00

PAÍS	TITULO	CONTRAPARTE	FINANCIADOR	IMPORTE
Ecuador	Mujeres de sectores populares organizadas y empoderadas para la defensa de derechos por una vida digna en Quito.	Fundación RurUrbana / Mujeres de Frente	Diputación de Valencia	60.000,00
	Sistema de participación social fortalecido impulsa modelo productivo sostenible con enfoque de género y derechos en Cotacachi	Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC) / Coorporación TOISAN en agrupación con MUNDUKINE	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	263.175,00
	Pueblos indígenas y campesinos fortalecen su gobernanza territorial, exigibilidad de derechos y protección de defensores y defensoras de la Naturaleza con liderazgo de mujeres y jóvenes	UDAPT, MICC, OMICSE	Govern Basc	485.684,96
	Mujeres organizadas defienden sus derechos y promueven la economía social y solidaria, con enfoque de sostenibilidad ambiental e interculturalidad en Cotacachi	AUCC	Agencia Asturiana de Cooperación	109.633,50

Fuente: Mapa de financiación ejecutada 2024 *Valores en euros*

Proyectos de educación emancipadora

TITULO	FINANCIADOR	IMPORTE
¡Caminamos juntas hacia las transiciones ecosociales! Por un cambio de paradigma global que promueva las economías feministas y transformadoras	ACCD (Projecte) - Agrupada EeA	49.964,00
Ciudades vivibles y feministas: ¡construyendo una ciudad cuidadora y de acogida!	Ajuntament de Barcelona	40.000,00
Tiempo de acción social y política: ¡hacia un pacto global de transición ecosocial!	Ajuntament de Barcelona	40.000,00
Acción por el clima: Ciudadanía global comprometida con el desarrollo humano y medioambiental sostenible en Menorca a través de la formación y sensibilización para la sostenibilidad de la vida	Fons Menorqui	7.000,00
Ciudadanía del Sur y Norte Global tejiendo saberes para la defensa de los DDHH y los bienes comunes.	Generalitat Valenciana (agrupada Perifèries del Món)	214.890,00
Resignifiquemos los DH en riesgo, la igualdad de género y el derecho a un medio ambiente con epistemologías del sur vinculadas a Guatemala, Honduras, México, Colombia, Ecuador, Perú y Marruecos.	ACCD (agrupada ODESC)	180.660,00
¡Tiempo de coherencia de políticas desde la protección integral feminista!	Ajuntament de Barcelona (Año 1/2)	40.000,00
Tejiendo redes desde Elche para la defensa de los DDHH y de la tierra	Ayuntamiento de Elche	3.025,00
Migraciones climáticas	Ayuntamiento de Burgos	1.645,86

Fuente: Mapa de financiación ejecutada 2024 *Valores en euros*

Consulta la Memoria completa de 2024:

Centro Labor

Del sur andino a Huelva: la tierra cansada del progreso

Desde las minas andinas hasta los invernaderos andaluces, las comunidades rurales denuncian los impactos de una misma lógica extractiva. Mientras Europa se reindustrializa con el nuevo Reglamento de materias primas, territorios del Sur Global y del sur de Europa europeo cargan con los costes sociales y ecológicos de un modelo que sigue llamando "transición" a su expolio. Las voces del Congreso de Economías Feministas de Sevilla trazan un mapa común de resistencia frente al extractivismo. Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, lo resume con crudeza:

"Nosotras somos las que respiramos el veneno, las que enfermamos, las que estamos en el centro de la contaminación."

Su denuncia conecta con la de mujeres andinas que defienden la tierra del litio y del cobre. Aunque separadas por océanos, comparten una misma herida: el cuerpo y el territorio como primer frente de la crisis ecológica.

Una **Huelva de playas y progreso** donde las **mujeres y la tierra** pagan el precio de la transición verde

Lidia Ucher · *Comunicación Entrepueblos*

En el Congreso de Economías Feministas de Sevilla, **Ana Pinto**, de Jornaleras de Huelva en Lucha, alertó sobre las consecuencias del extractivismo agroindustrial y minero en la salud, el agua y la dignidad de las mujeres rurales. Este artículo recoge fragmentos de su intervención.

El nuevo reglamento europeo sobre materias primas promete una "transición verde", pero la realidad demuestra otra cosa: mientras el Norte reclama minerales para su reindustrialización, el Sur –y también el sur de Europa– paga el precio.

CUERPOS Y TERRITORIOS EN SACRIFICIO

"Huelva no es solo marisco y jamón: es una zona de sacrificio", explicó Ana Pinto, mostrando un mapa donde se cruzan minas reactivadas, vertederos de residuos peligrosos, el Polo Químico y los invernaderos del fruto rojo. Recordó que, además, en municipios como Escacena del Campo hay ya once proyectos de investigación minera autorizados por la Junta de Andalucía que comprometen buena parte del territorio, especialmente la aldea de Tejada y su entorno natural. Diversos colectivos ecologistas han advertido que estos permisos podrían poner en riesgo el suministro de agua potable del Condado y zonas protegidas cercanas. A su alrededor, el aire y el agua están contaminados por los fosfoyesos de los fertilizantes, y las riberas se han convertido en una cicatriz abierta de la negligencia. "Nos fumigan mientras trabajamos; una compañera se mareó, protestó y la despidieron", añade, mientras recuerda que su sindicato, Jornaleras de Huelva en Lucha, ha empezado a ganar demandas por despidos injustificados vinculados a estas prácticas.

EXPLOTACIÓN INVISIBLE

En la industria del fruto rojo, la mano de obra se reparte casi a partes iguales entre trabajadoras locales y migrantes, miles de ellas llegadas por contratación en origen. Muchas viven en asentamientos sin agua ni luz, sometidas a normas abusivas que prohíben hablar durante la jornada, con listas de productividad públicas que fomentan la competencia y el miedo. Además, Pinto insiste en que no son las contratadas en origen las que peores condiciones tienen: "La gente que vive en los asentamientos chabolistas, a base de cartón, palets de madera y plástico, sin luz ni agua, ni son de contratación en origen ni tiene, la mayoría, papeles".

"Hay días con más de sesenta grados dentro del invernadero. Si vas a por agua, pierdes tiempo y te señalan. La ansiedad y las pastillas se han normalizado", denuncia Pinto, "como si la salud mental fuera el precio asumido por producir fresas baratas para Europa".

El circuito de la precariedad se completa con delegados sindicales cooptados por las empresas, un sistema de sanciones por "baja productividad" que no tiene en cuenta la salud ni la edad, y el racismo institucional de los contratos en origen con compromisos de retorno –"como requisito principal", recalca Pinto. La cadena de valor descarga sus costes sobre los cuerpos feminizados y los barrios populares.

En su intervención, Ana Pinto proyectó una fotografía tan real como simbólica: los plásticos de los invernaderos frente

al Polo Químico de Huelva, "echando humo todo el rato". Ironizó sobre la imagen oficial de modernidad y progreso con la que se promociona la ciudad, a la que "ya llaman *Huelvayork*", entre el olor a refinería y el aire cargado de pesticidas. Dijo que esa es la verdadera postal del extractivismo en la provincia: contaminación, agua agotada y trabajo precario.

ORGANIZAR LA DIGNIDAD

Ante la connivencia y la impunidad, Jornaleras de Huelva en Lucha apostó por la autoorganización. "Hemos creado nuestras propias secciones sindicales, una con mujeres de los pueblos y otra con las contratadas en origen. Desde marzo podemos entrar en las viviendas de las compañeras y acompañarlas en las demandas", explica. "Ha sido nuestro principal logro después de una larga lucha –añade–, porque antes estaba totalmente prohibido entrar en las viviendas, y por eso nuestro lema siempre fue "Abramos las cancelas". La organización ha logrado victorias judiciales clave y, sobre todo, abrir un horizonte de derechos en un territorio que parecía condenado a naturalizar la violencia laboral y ambiental.

Su agenda es nítida: fin de la impunidad patronal y del *ecocidio*; inspecciones laborales efectivas; regularización de las trabajadoras migrantes. Pinto lo formula desde un ecofeminismo práctico: "No queremos sostenibilidad de escaparate. Queremos alternativas laborales reales, trabajo en el monte, transición agroecológica, reforma agraria y renta básica para no tener que elegir entre comer o enfermar".

CLAVES

- 52 % de trabajadoras locales y 48 % migrantes en la industria del fruto rojo.
- Asentamientos sin agua ni luz y temperaturas superiores a 50 °C en invernaderos.
- Fosfoyesos contaminantes en la ría de Huelva: un legado del Polo Químico.
- Reglamento europeo de materias primas: reindustrialización a costa de nuevos territorios de sacrificio.
- Agenda de Jornaleras de Huelva en Lucha: fin de fumigaciones, inspección real, regularización y transición agroecológica.

DE LA ZONA ANDINA A HUELVA

La intervención de Ana Pinto vincula luchas que a menudo se cuentan por separado: la minería que avanza sobre comunidades andinas en Ecuador y Perú, y los agronegocios que enferman a las jornaleras del suroeste peninsular. En ambos casos, el discurso del progreso oculta los mismos saldos: agua contaminada, suelos exhaustos, cuerpos agotados. Escucharla es reconocer que no hay transición justa sin justicia laboral y territorial. Que la soberanía alimentaria y minera empieza por cuidar la vida de quienes tocan la tierra.

Profundización de la **lógica extractivista** en **Perú**

Charla con **José De Echave**, investigador y especialista en la problemática minera y ambiental del Perú, director de CooperAcción y **Jaime Borda**, comunicador social originario de Puno y secretario ejecutivo de la Red Muqui, que coordina más de 30 organizaciones que acompañan a comunidades afectadas por la minería en el Perú.

La UE aprobó en 2024 una ley para asegurar minerales estratégicos en el marco de la transición energética. Su iniciativa Global Gateway busca invertir hasta 300.000 millones de euros en infraestructuras para garantizar el acceso a recursos como cobre, litio y tierras raras. Perú, segundo productor mundial de cobre, aporta alrededor del 11% del total. En el Sur Andino, el "corredor minero" concentra el 40% de la producción y numerosos conflictos socioambientales. Empresas transnacionales como MMG, Grupo México, Anglo American y Glencore figuran entre las más denunciadas por abusos según el Monitor mundial de minerales en transición.

En Perú, décadas de extractivismo han convertido territorios de comunidades y pueblos originarios en zonas de sacrificio que deterioran gravemente la salud, la vida y la naturaleza. ¿En qué medida y formas se está profundizando la lógica extractivista en el país? ¿Qué ha cambiado?

José De Echave: Se está viviendo un nuevo ciclo de expansión de actividades como la minería y se está profundizando la lógica extractivista, con los mismos actores (la minería a gran escala, predominantemente transnacional), pero también con otros nuevos (pequeña minería, informal y abiertamente ilegal), buscando consolidar territorios como zonas de sacrificio. El sur del país, sobre todo, el sur andino, es un buen ejemplo de esta lógica de territorios que tienen que sacrificarse en función de la lógica extractivista. También la Amazonía está siendo seriamente afectada por un conjunto de actividades profundamente extractivistas, predominantemente ilegales (tala, narcotráfico y sobre todo minería).

Los precios de cobre y del oro (los 2 principales minerales de exportación del Perú), han batido todos los récords previos en este segundo semestre del año: a mediados del mes de octubre, el oro alcanzó por primera vez los US$ 4,200 la onza, subiendo su cotización en lo que va del año, en un 55%. El cobre no se quedó atrás y alcanzó una cotización de US$ 5 la libra, con un incremento anual del 25%. La cotización de la plata también ha aumentado en lo que va del año en casi un 70%, alcanzando el nivel más alto de las últimas cuatro décadas.

El mensaje del sector empresarial minero y de los defensores del modelo es que el Perú debe aprovechar este nuevo contexto de precios altos y destrabar toda la cartera de proyectos de inversión. Para ello se propone seguir implementando paquetes de desregulación: en los últimos años el mecanismo utilizado ha sido el de los shocks desregulatorios trabajados en las denominadas mesas ejecutivas minero-energéticas, entre el gobierno y los empresarios mineros.

En el último año se han anunciado nada menos que 385 medidas desregulatorias. La apuesta es sacar adelante proyectos controvertidos y que han significado grandes conflictos sociales, por su afectación a los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de las poblaciones. Es el caso del proyecto de Tía María, en el departamento de Arequipa, que durante 15 años ha enfrentado la resistencia de la población vecina del Valle de Tambo.

El otro factor gravitante es el avance de la minería informal y también de la abiertamente ilegal. El factor precio de

los minerales, es clave para entender la expansión de este tipo de minería que, en algunos casos, está siendo desarrollada por las propias comunidades y en otros por grupos que se imponen con mucha violencia. En la Amazonía e incluso en algunas zonas andinas, este tipo de minería está siendo controlada por el crimen organizado, sometiendo y desplazando de manera forzada a poblaciones enteras.

¿Qué relación tiene el extractivismo en los territorios con la llamada transición verde en el norte global? ¿Qué condiciones mínimas deberían de verificarse para una transición justa, en términos sociales, económicos y ambientales?

JDE: Existe una relación directa entre la propuesta de la transición corporativa que viene del norte global y la profundización extractivista en países como el Perú. Como señala el Banco Mundial, "se estima que se requerirán más de 3,000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 C en el futuro". Está claro que para que China, Estados Unidos y Europa desfosilicen sus economías, van a necesitar nuevas y mayores zonas de extracción, por lo tanto, estamos hablando de un nuevo momento de expansión extractivista y de apropiación de materias primas. En el Perú el discurso es: "tenemos que aprovechar el impulso que le da al cobre la transición energética [...]". "Tenemos una riqueza geológica importante [...]" "Ya tuvimos diez años de precios altos y, ahora, la transición energética nos trae un nuevo auge de precios, etc. El discurso de los defensores del modelo extractivista es extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo.

Desde otra orilla, se cuestiona que se busque consolidar el actual esquema de extracción exacerbada con algunos ajustes y cambios cosméticos y se plantea una propuesta de gobernanza como parte de un proceso de transición y de transformación social y ecológica, que tiene como objetivo romper el esquema de depredación de bienes naturales vigente que se ha impuesto en los territorios y apunta a la construcción de nuevos equilibrios ambientales, sociales, económicos y culturales que rompan con el predominio de una extracción exacerbada.

La propuesta de transición alternativa, apunta a transformar los actuales patrones de poder, así como las narrativas e imaginarios que los sostienen. En distintos espacios regionales y globales se comienza a hablar de la necesidad de un nuevo pacto ecosocial e intercultural para salvaguardar los derechos de las actuales y las futuras generaciones a una vida digna, como también para poner los derechos de la naturaleza al centro de nuestra sociedad.

El litio ha sido identificado como un recurso clave para la transición energética global, debido a su uso en

Kristhian Luis Pachas Condor

baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. En Perú existen hallazgos significativos de litio, en particular en el proyecto Falchani, en Puno. Según estimaciones, este proyecto podría producir hasta 84 kilotoneladas de carbonato de litio por año, con una inversión cercana a los USD 800 millones. ¿Cuál es el avance del proyecto? ¿Cuáles son los potenciales impactos ambientales y sociales de la extracción de litio en esta región? ¿Existe un marco regulatorio adecuado para su gestión?

Jaime Borda: El proyecto de litio en Puno continúa en fase de exploración, pese a los anuncios mediáticos que aseguraban un pronto inicio de operaciones. No ha avanzado en los permisos necesarios para pasar a etapa de explotación. La empresa Macusani Yellowcake –filial canadiense– ha intentado reposicionar el proyecto destacando la presencia de uranio y cesio en el mismo yacimiento, en un contexto de caída drástica del precio del litio (de 70,000 a 10,000 dólares por tonelada entre 2023 y 2024), lo que revela un giro estratégico más que un avance real.

Los impactos ambientales potenciales son de alta sensibilidad. La cercanía al glaciar Quelccaya, el mayor glaciar tropical del mundo, convierte cualquier operación a tajo abierto en un riesgo directo: el material particulado puede acelerar su retroceso y alterar su composición. A esto se suma la presencia confirmada de uranio, que introduce riesgos de contaminación radiactiva tanto en la fase de operación como en el transporte del mineral, un escenario para el cual el país no cuenta con capacidades institucionales suficientes.

En el plano social, se han identificado superposiciones de concesiones sobre restos arqueológicos y áreas de valor cultural excepcional, así como la ausencia de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas. En lugar de un proceso ordenado de participación indígena, la empresa ha recurrido a negociaciones bilaterales y fragmentadas con caseríos, propietarios y pequeños núcleos poblados para asegurar control territorial, debilitando el tejido comunitario y generando tensiones locales.

Finalmente, el marco regulatorio es absolutamente insuficiente. El Perú no cuenta con normativa específica para la explotación y beneficio de minerales radioactivos como el uranio. Pese a ello, la empresa sostiene que el mineral puede tratarse "como uno convencional", evitando así permisos adicionales y controles especializados. Esto expone un vacío crítico en la política pública y confirma la necesidad de un debate nacional urgente antes de permitir cualquier avance del proyecto.

Los proyectos mineros se asientan en zonas de recarga hídrica ya que son intensivos en el uso de agua. Se estima que por cada onza de oro se utilizan 21.000 litros de agua. ¿Cómo impacta en Perú la minería sobre la disponibilidad y calidad del agua en los territorios? ¿Nos puedes explicar el caso del proyecto Ariana y la amenaza que supone para el agua de Lima?

JDE: Como documenta la Defensoría del Pueblo del Perú, gran parte de los conflictos vinculados a la minería tienen relación con el tema del agua. La minería es una actividad que disputa abiertamente el control de importantes fuentes de agua. Además, muchas veces se ubica en la parte alta de las cuencas y genera graves problemas de contaminación.

En las últimas décadas varios conflictos entre la minería y poblaciones locales han tenido notoriedad, teniendo como eje de preocupación el agua. Casos como Conga, Cerro Quilish, Río Blanco, Tambogrande, Tía María, Santa Ana, entre varios otros, han estado en el centro de la polémica, generando discusión sobre los impactos que genera esta actividad, la carencia de instituciones rectoras con presencia efectiva en los territorios y la necesidad que existe de ajustar varias políticas públicas.

Por lo general, desde la capital del Perú, Lima, estos conflictos se han visto como lejanos. Como algo que ocurre a poblaciones, principalmente rurales, que se encuentran muy alejadas de los centros de poder político, económico y mediático. Sin embargo, es bueno recordar que también hay una Lima vinculada a la minería. Hace unos años, CooperAccion identificó un hecho que estaba pasando desapercibido: la construcción de un proyecto minero, que lleva como nombre Ariana, y que se ubica en medio de la principal zona productora de agua para la ciudad de Lima y Callao, precisamente donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el túnel trasandino, etc.) que conforman el denominado Sistema Hídrico Marcapomacocha.

> Gran parte de los conflictos vinculados a la minería tienen relación con el tema del agua

Desde que tomamos conocimiento del proyecto Ariana, buscamos difundirlo y, sobre todo, mostrar los graves riesgos que representa para el abastecimiento de agua de la población de Lima y Callao (13 millones de personas). En todo este tiempo, hemos generado información relevante, se han difundido varios estudios realizados y en paralelo se pusieron en marcha estrategias de campaña, de incidencia y también se decidió actuar en el terreno legal para detener el proyecto.

El agua está en el centro de la reflexión en el caso Ariana ya que muestra la falta de protección de las fuentes de agua; el deterioro de las cuencas hidrográficas; choques hídricos cada vez más severos, variabilidad de las precipitaciones; retroceso de los glaciares y su capacidad de almacenamiento; el uso no sostenible del agua subterránea (varios acuíferos se están agotando), son, entre otros, componentes que provocan que un porcentaje importante de peruanos y peruanas enfrenten de manera creciente una situación de inseguridad hídrica.

Poner en riesgo una zona productora de agua tan importante, como a todas luces ocurriría si la mina Ariana termina de construirse y comienza a operar, carece de sentido. Ariana es una clara evidencia que urge fortalecer la institucionalidad ambiental, hacer ordenamiento territorial y cambiar el enfoque de la gestión del agua en el país, para, precisamente, apostar por la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia que requiere cualquier estrategia que apunte a lograr la seguridad hídrica.

Los proyectos mineros de Glencore en Espinar afectan gravemente el derecho al agua y a la salud de las comunidades tal y como reconocen los EIA. Más de 700 personas presentan metales pesados por encima de los límites, evidenciando una crisis sanitaria ligada a la contaminación minera. ¿Cómo se realiza el monitoreo del agua para prevenir la contaminación? ¿Cuáles son las obligaciones y mecanismos para la remediación ambiental, atención y reparación a las víctimas? ¿Qué propuestas y demandas surgen desde la población y la sociedad civil?

JB: Espinar (Cusco) es uno de los casos más emblemáticos y documentados a nivel nacional por la magnitud de la afectación a la salud humana y el agua. Allí, la calidad del agua y los procesos de monitoreo se han convertido en un punto neurálgico para comprender cómo opera el sistema de fiscalización ambiental en el país y cuáles son sus límites. Lamentablemente, el monitoreo no cumple una función preventiva ni de alerta temprana; más bien responde a una lógica institucional centrada en el control formal y la verificación del cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin una mirada integral sobre la protección del derecho humano al agua y la salud.

En Espinar, durante la última década, más del 75% del agua consumida por las comunidades presenta presencia de

DHSF

metales pesados, una situación alarmante que debería activar protocolos de emergencia sanitaria, pero que hasta ahora no ha tenido respuesta efectiva del Estado peruano.

Frente a la insuficiencia estatal, diversas organizaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras, CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, Red Muqui, Amnistía Internacional, entre otras, han impulsado monitoreos ambientales independientes con participación comunitaria. Estos procesos han permitido visibilizar la magnitud de la contaminación y dar soporte técnico a las denuncias, pero carecen de reconocimiento formal por parte del Estado, lo que limita su capacidad para generar acciones vinculantes. Esta desarticulación institucional refleja un problema estructural: el sistema peruano de fiscalización ambiental está más orientado a garantizar la continuidad de la actividad extractiva que a proteger la salud y los derechos de las personas.

En cuanto a las obligaciones de remediación ambiental, atención y reparación a las víctimas, la situación es aún más crítica. Aunque existen avances normativos, su implementación es casi nula. Las empresas mineras suelen recurrir a mecanismos legales para evadir responsabilidades.

En ese escenario, las demandas de la población de Espinar se han transformado con el tiempo, pero hay cinco demandas históricas y persistentes: 1) Acceso a agua de consumo humano de calidad; 2) Sanción efectiva a la empresa por los impactos ambientales acumulados; 3) Atención integral a las personas afectadas por metales pesados, incluso fuera del país si es necesario; 4) Reconocimiento y saneamiento físico-legal de las tierras que quedaron fuera de los procesos de negociación minera; 5) Reformulación del Convenio Marco, que no ha sido actualizado desde la llegada de Glencore (2013), a pesar del avance del proyecto Coroccohuayco.

Estas demandas, pese a estar documentadas y respaldadas por acuerdos en distintas etapas, continúan sin cumplirse hasta 2025, lo que evidencia que los mecanismos de diálogo son insuficientes para enfrentar la complejidad de los impactos del extractivismo en territorios como Espinar.

La resistencia a proyectos mineros, implica el impulso de transiciones y alternativas desde una perspectiva decolonial, en términos propios del sur y desde los territorios, rompiendo lazos de dominación económica, histórica y cultural. ¿Cuáles son las alternativas al extractivismo en Perú y qué transiciones se requieren? ¿Qué retos supone transitar hacia buenos vivires por la sostenibilidad de la vida, para los pueblos y las comunidades?

JB: En la actualidad, las alternativas al extractivismo en el Perú se desarrollan en un contexto de fuerte asimetría. Mientras el Estado insiste en profundizar el modelo primario-exportador, bajo la narrativa del crecimiento económico, los territorios vienen construyendo prácticas concretas que defienden la vida, sostienen la producción local y protegen los ecosistemas. En Red Muqui hemos publicado recientemente el libro "Alternativas al Extractivismo en el Perú", donde se evidencia que Ayacucho, Pasco, Cusco, Piura, Puno y otras regiones sostienen iniciativas comunitarias que van desde la gestión participativa del agua y la recuperación de semillas

nativas hasta sistemas agroecológicos, vigilancia ambiental y tecnologías ancestrales de conservación del territorio. Estas experiencias revelan que las alternativas no son teóricas: ya existen, funcionan y se sostienen en la articulación entre saberes ancestrales e innovaciones contemporáneas. Lo que falta es reconocimiento estatal, financiamiento público, reformas estructurales y voluntad política para escalarlas.

Las transiciones necesarias no son solo económicas, son políticas, civilizatorias y culturales. Implican desmontar el mito del desarrollo basado en crecimiento ilimitado, consumo intensivo y extracción permanente. Exigen avanzar hacia un Estado post extractivista que coloque el agua, la vida y los territorios como ejes rectores de la planificación nacional. Esto supone fortalecer la gobernanza comunitaria del agua, garantizar autonomías territoriales, diversificar las economías desde la agricultura familiar y el manejo sostenible de los bienes comunes, e incorporar principios como el Buen Vivir y la naturaleza como sujeto de derechos. Asimismo, debemos cuestionar la transición energética global que reproduce la dependencia extractiva del Sur, ahora bajo la demanda de "minerales críticos". Las transiciones que necesitamos deben iniciar reconociendo que la naturaleza no es solo un recurso, sino una entidad viva con agencia propia.

Transitar hacia los buenos vivires implica asumir retos profundos. El primero es enfrentar la fragmentación institucional y el poder corporativo que captura la política minera y ambiental. El segundo es desmontar la violencia estructural contra defensores y defensoras de los territorios, quienes enfrentan criminalización, estigmatización e incluso riesgo de muerte. El tercero es reconocer las desigualdades internas, especialmente las que afectan a las mujeres, sostén imprescindible de la soberanía alimentaria y la organización comunitaria.

El reto mayor, sin embargo, es cultural: reconstruir la relación sociedad-naturaleza desde la reciprocidad, la comunalidad y la ecodependencia. Para Red Muqui, el principal reto de la transición hacia los buenos vivires es que la crisis global impulsa una aceleración extractiva que el Estado peruano interpreta como más minería, promoviendo proyectos como Tía María, Río Blanco, Conga, entre otros, que no cuentan con licencia social y son inviables técnicamente.

El Perú enfrenta un período de enorme crisis política que ha conllevado el deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, cerrando espacios para la búsqueda de justicia para las poblaciones afectadas en sus derechos humanos y ambientales. ¿Cómo se vienen reorganizando, la sociedad civil y las organizaciones, frente a tanta desprotección? ¿Cómo se puede seguir acompañando desde la solidaridad nacional e internacional?

JB: Hoy, la sociedad civil peruana se reorganiza en medio de una crisis política prolongada y frente a un cerco institucional que reduce el espacio cívico y limita el trabajo de las organizaciones sociales, incluidas las ONG. Ante este escenario, las comunidades afectadas por el extractivismo minero están recuperando y fortaleciendo sus formas históricas de organización territorial. Se han articulado redes de vigilantes y monitores ambientales comunitarios, plataformas de afectados por metales pesados, colectivos de defensa del agua, campañas en favor de los defensores de derechos humanos y ambientales y espacios de coordinación más amplia, como la Plataforma por la Democracia. Si bien estos esfuerzos enfrentan la ofensiva autoritaria del Congreso y el Ejecutivo, todavía son insuficientes en términos de articulación amplia de la sociedad civil en el Perú.

Existen varios caminos estratégicos abiertos. Uno fundamental es profundizar la articulación interterritorial –local, regional y nacional– para fortalecer la incidencia política desde los territorios. Otro camino es aprovechar los marcos legales y los mecanismos internacionales para denunciar violaciones de derechos humanos y ambientales ante tribunales y organismos multilaterales. Las experiencias de autogobierno territorial como la Nación Wampis, la autonomía Awajún o las autoridades originarias del altiplano muestran que el movimiento social apuesta cada vez más por estructuras organizativas autónomas, sostenidas en la territorialidad y en el derecho propio. Finalmente, la construcción de alianzas amplias con ciudadanía urbana, juventudes, feministas, academia crítica y medios independientes será clave para transformar las luchas socioambientales en una agenda nacional de democratización y justicia ecológica.

Desde la solidaridad nacional e internacional, el acompañamiento debe respetar la autodeterminación de los pueblos y al mismo tiempo fortalecer su capacidad de incidencia. No se trata solo de financiamiento o visibilidad, sino de construir espacios de formación compartida, documentación rigurosa de violaciones y articulación con redes globales. La solidaridad debe traducirse en co-responsabilidad política, en el fortalecimiento de la protección a defensores y defensoras, en el seguimiento a compromisos del Estado peruano ante organismos internacionales y en el apoyo técnico y jurídico que permita a las comunidades sostener su resistencia y sus propuestas de transformación. Solo así será posible avanzar hacia un país donde la defensa del agua, del territorio y de la vida sea el centro de un horizonte democrático y sostenible.

IX Congreso de **Economía Feminista de Sevilla**, resistencias globales desde los **cuidados**

Olga Abad, Natalia Riera, Lucila Rivera,
Montse Benito, Marta Soler, Lidia Ucher, Dolo García

De Gaza a Abya Yala: alianzas ecofeministas, rurales y urbanas frente al capitaloceno y el avance de las ultraderechas. El IX Congreso de Economía Feminista, celebrado del 2 al 4 de octubre de 2025 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, fue un espacio de análisis, resistencia y esperanza. Entrepueblos formó parte del comité local junto a profesorado de la UPO y la Universidad de Sevilla, además de La Transicionera y Economistas sin Fronteras. El congreso reunió a activistas, investigadoras y defensoras de la economía feminista de América Latina y Europa con un mismo propósito: tender puentes entre luchas locales y agendas globales.

En un contexto de ascenso de las ultraderechas y de solidaridad urgente con Palestina ante la crisis en Gaza, las voces ecofeministas resonaron con fuerza. La inauguración coincidió con una huelga estudiantil en apoyo al pueblo palestino y la clausura con una manifestación solidaria. La economía feminista se afirmó como propuesta de justicia económica ligada a la solidaridad internacionalista.

El Congreso fue análisis para la acción: un recordatorio de que las luchas feministas y de justicia social se entrelazan con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de futuros sostenibles.

EL CAMPO NOS INTERPELA: ECONOMÍAS FEMINISTAS RURALES DESDE LAS PERIFERIAS

Desde Entrepueblos insistimos en que la agroecología y las economías feministas rurales ocuparan un lugar central en la agenda del IX Congreso de Economía Feminista, un ámbito poco explorado hasta ahora. Gracias a este esfuerzo colectivo se logró organizar la plenaria "Economías feministas rurales y agroalimentarias en las periferias del Estado español", moderada por Marta Soler, economista agroecológica feminista y miembro de Entrepueblos.

Soler recordó que este Congreso buscaba romper el urbanocentrismo que nos sesga y aprender del campo para comprender "cómo se está conformando el conflicto capital-vida". Desde Entrepueblos, explicó, se ha insistido en que la agroecología y las economías feministas rurales sean parte central del debate, "porque ahí, en los márgenes, se están gestando las transiciones que necesitamos".

Defendió que mirar a las periferias rurales permite ver violencias, pero también alternativas que nacen de la agroecología, la soberanía alimentaria y los vínculos comunitarios. "El campo no es pasado –dijo–, es el lugar donde se está ensayando el futuro de las economías que sostienen la vida."

Las mujeres rurales marcaron un punto de inflexión. Agricultoras, jornaleras, sindicalistas, cooperativistas y educadoras populares de Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias llevaron su sabiduría a la Universidad, derribando muros simbólicos y urbanos.

Ana Pinto Lepe radiografió la violencia patriarcal, clasista y racista en los frutos rojos de Huelva, "esa violencia que se esconde en nuestros platos". Con la fuerza de Jornaleras de Huelva en Lucha y del nuevo sindicalismo, denunció explotación laboral, contaminación y retorno racista. Reclamó

dejar atrás la romantización del campo y reconocer tanto las violencias como las resistencias.

Leticia Toledo (Sierra de Cádiz) defendió que su trabajo es "cultivar relaciones, no productos". La agroecología feminista parte de situarse en la relación con la tierra y con la comunidad: "en ese intermedio se rompen las jerarquías". Reivindicó redes de reciprocidad y cuidado, y advirtió sobre la soledad y la falta de relevo generacional en el campo.

Gloria Sosa (CALA, Alburquerque) denunció la mirada externa que simplifica la vida rural –"estamos muy cansadas de que se nos analice desde fuera"– y recordó que Extremadura se ha convertido en "una zona de sacrificio total" ante el avance de proyectos extractivos. Aun así, pidió "no victimizarse": las mujeres rurales son protagonistas de la resistencia.

CIUDADES VIVIBLES Y FEMINISTAS: TEJIENDO ALIANZAS CONTRA EL CAPITALOCENO

Natalia Riera abrió la sesión explicando que Entrepueblos trabaja desde hace años en una red de alianzas feministas entre colectivos del Estado español y Abya Yala para construir ciudades y pueblos vivibles. Señaló que el proyecto nace de "diversas alianzas feministas entre diversos colectivos tanto del Estado español como de América Latina [...] por esta necesidad de construir estas ciudades feministas y vivibles como respuesta al capitaloceno". Recordó que estos procesos articulan tanto a colectivos rurales como urbanos y se inscriben en el conflicto entre capital y vida: buscan "poner los cuidados colectivos de todas las personas en la colectividad y naturaleza en el centro", reivindicando la interdependencia frente a un sistema capitalista, patriarcal y racista.

Lidia Ucher

Verónica "Livi" Sánchez (Kikiricoop/La Varagaña) describió el desmantelamiento del tejido campesino en Asturias y una respuesta concreta: turno colectivo de cuidados para las criaturas, remunerado al mismo nivel que otras tareas. Reivindicó salarios dignos y criticó la épica de la "heroína rural".

Isabel Vilalba Seivane (Sindicato Labrego Galego) conectó la finca con la calle: "están expoliando el único espacio de vida que tenemos, el planeta". Defendió el derecho universal a una alimentación saludable y criticó la agroecología elitista "que sólo pueden pagar unos pocos". Recordó la conquista de la titularidad compartida y la necesidad de paridad en los espacios de representación.

Balance. Las periferias rurales comparten patrón: explotación, extractivismo y burocracias hostiles. Desde los pueblos se tejen resistencias ecofeministas –sindicales, cooperativas, educativas y comunitarias– que sostienen la vida con dignidad.

Riera subrayó que estas alianzas se cimentan en la economía feminista, a la que calificó de "base imprescindible para transitar [...] las transiciones ecosociales justas y feministas". En su intervención propuso repensar las ciudades desde la diversidad, los cuidados y el territorio, denunciando los impactos del extractivismo y las cadenas globales de cuidados que precariza la vida de las mujeres y de las personas migrantes.

Abogó por un urbanismo feminista que "ponga la vida en el centro con la planificación urbana" y combinó esta propuesta con un llamamiento a la horizontalidad, la interseccionalidad y la escucha mutua entre los distintos feminismos. Habló de construir "horizontes que nos llevan a la transformación ecosocial feminista [...] crear esta comunidad de comunidades, de tejer redes, cuidados y resistencias" y de reconocer a las defensoras de la vida como activistas que protegen la soberanía alimentaria y los territorios.

Lidia Ucher

Cerró invitando a consultar las publicaciones de Entrepueblos sobre ciudades vivibles y agradeciendo a quienes tejen puentes entre Abya Yala y Europa.

FEMINISMO INDÍGENA Y DEFENSA DEL TERRITORIO (CHIAPAS)

La segunda intervención situó a Chiapas (México) como ejemplo de resistencia frente al extractivismo. Se recordó que el EZLN fue pionero en politizar el feminismo dentro de los movimientos indígenas y que su lucha se sostiene en el biocentrismo: "ninguna vida vale más que otra". Las mujeres zapatistas, dijo la ponente, "nos acuerpamos entre nosotras para defender territorio y semillas". Se denunciaron proyectos extractivos y turísticos que colonizan tierras, y se nombró el cuerpo como primer territorio de defensa.

APRENDIENDO DE LAS ECONOMÍAS FEMINISTAS DE ABYA YALA

Uno de los rasgos más potentes de este IX Congreso de Economía Feminista ha sido la fuerza que llega desde los "sures". Entrepueblos concentró allí buena parte de su trabajo, contribuyendo a que el eje de Ecofeminismos, agroecología, soberanía alimentaria y ruralidades mostrara con claridad las propuestas políticas que nacen de los territorios. La sesión del jueves por la mañana fue un ejemplo de ese aprendizaje mutuo. Las alianzas internacionales con Abya Yala ocuparon un lugar central, comprometiéndonos a hermanar los congresos y encuentros de ambos lados del Atlántico. Más que un gesto simbólico, se trata de un proceso vivo de diálogo, de intercambio de experiencias y de articulación de luchas en red.

Daniela Osorio Cabrera recordó que en Abya Yala los *Encuentros de Economía Feminista* –no "congresos"– surgen desde los movimientos sociales y se construyen despacio, con tiempos asamblearios. Es una forma consciente de romper el academicismo y abrir el espacio a las gentes que sostienen las luchas desde abajo. "Nos organizamos para atender necesidades, para organizar la vida", dijo. De su intervención quedó resonando la necesidad de desmercantilizar los encuentros: apostar por alojamientos solidarios, economías locales y redes de apoyo mutuo que sostengan los cuidados colectivos. "Necesitamos encontrarnos para reencantarnos", resumió.

También insistió en recuperar las memorias y genealogías olvidadas: las ancestrales, las indígenas, las afrodescendientes, las trans. Recordó que las violencias del narco en los territorios siguen llenando cárceles de mujeres pobres, y que frente a esa guerra contra la vida, la economía feminista se construye como refugio y como respuesta.

Melisa Planchesteiner habló de partir de la experiencia vivida, de desbordar la academia y de tejer alianzas incómodas e insólitas que hagan avanzar el pensamiento y la acción. Subrayó la relevancia de lo artístico como herramienta de transformación política y emocional, capaz de destrabar lo que a veces la palabra no alcanza.

Los momentos en que cantamos y bailamos –el cante en galego, la relatoría cantada– fueron también espacios de pensamiento colectivo: maneras de tejer red, de emocionarnos y *reencantarnos*.

El arte no es adorno: es un modo de conocimiento, una forma de sostener la vida en común cuando las palabras ya no bastan.

Amaia Pérez Orozco recogió los aprendizajes de Abya Yala en torno a la tríada cuerpo-tiempo-territorio. Explicó que nos invitan a un desborde de la economía y también de la

economía feminista, hacia una mirada arraigada e internacionalista a la vez. "Somos sujetos híbridos –dijo–, no solo lo que somos sino también lo que queremos ser. En eso que queremos ser, los vínculos con Abya Yala son fundamentales." **Mariana Da Silva**, desde Argentina, dejó una pregunta que atravesó toda la sala: *¿cómo militar en la impotencia?* Un reto que hoy acompaña a muchos movimientos cuando el cansancio y la desesperanza se hacen presentes.

Para cerrar, **Daniela Osorio** insistió en la sostenibilidad de la vida frente a la guerra contra la vida. Llamó a seguir alimentando el diálogo Sur-Norte, desmontando la colonización, pero también desarmando la dualidad y reconociendo los "sures del norte".

RESISTIR AL ODIO: FEMINISMOS INTERNACIONALES FRENTE A LAS ULTRADERECHAS

El plenario "Cómo enfrentar el avance de las ultraderechas" reunió voces de América Latina y del Estado español para tejer estrategias globales. La moderadora, **Margarita Vega Rapún**, propuso mirar más allá de Europa y recoger experiencias del Sur Global.

La gazatí **Suha Alnajjar**, presidenta de la Comunidad Palestina en Sevilla, contextualizó la violencia estructural que sufren las mujeres y niñas de Gaza y el papel de las mujeres palestinas en la preservación de cultura e identidad. Recordó: "a lo largo de la historia, las mujeres palestinas han sido fuertes, valientes, poderosas, guerreras y luchadoras". Denunció la impunidad de la ocupación y reclamó la complicidad de los movimientos feministas para romperla.

Miriam Nobre, agroecóloga feminista y coordinadora de SOF – Sempreviva Organização Feminista (Brasil), vinculó ultraderecha y neoliberalismo y defendió que la economía feminista y la agroecología aportan otras temporalidades para producir alimentos y vida. "También desde los tiempos construimos resistencias [...] podemos intentar funcionar a partir de las otras temporalidades", dijo, invitando a repensar tiempo y espacio desde comunidades campesinas e indígenas. Añadió la necesidad de no negociar derechos con sectores "menos extremos" de la derecha y de sostener la radicalidad como límite ético.

Flora Partenio, profesora-investigadora (EIDAES/UNSAM, AAIHMEG y red DAWN), analizó las alianzas transnacionales de la ultraderecha –incluyendo sectores evangélicos y ultracatólicos– y su dominio de redes sociales. Propuso combinar acción comunitaria, lucha legal y disputa mediática para desactivar el odio.

Pastora Filigrana, abogada laboralista, sindicalista andaluza y mujer gitana, intervino con una de las exposiciones más críticas y lúcidas de la clausura. Habló sin rodeos del vínculo entre neoliberalismo y ultraderecha: "El ascenso principal de las derechas cada vez más ultra se debe a una gran connivencia con el neoliberalismo económico."

Denunció que el proyecto neoliberal necesita cuerpos disponibles, baratos y disciplinados, y que por eso las políticas antifeministas no son un accidente sino una estrategia: "Cuando prohíben el aborto o recortan derechos reproductivos lo que buscan es conseguir cuerpos de mujeres aún más baratos para la explotación."

Explicó cómo leyes de extranjería, criminalización de la pobreza y discursos del odio se sostienen sobre la misma base: producir miedo y obediencia: "El racismo, las políticas migratorias, la persecución del pueblo gitano o de las personas migrantes sirven para mantener la jerarquía social que necesita el capital."

Aportó respuestas comunitarias y micropolíticas. Relató la fiesta de bienvenida en La Macarena (Sevilla): "Una fiesta de bienvenida en un parque público, con actuaciones musicales y con personas migrantes contando sus vidas. Cuando se les escucha directamente, esa sensación de inseguridad que el discurso del odio siembra, desaparece."

Defendió que la micropolítica cotidiana –acompañar, cuidar, organizar redes vecinales, denunciar colectivamente delitos de odio– sostiene los avances: "La micropolítica es agotadora, pero es la que sostiene los avances. No hay resistencia sin cuidado."

Y cerró con una idea que atraviesa el Congreso: "La economía feminista no puede limitarse a teorizar sobre el cuidado: tiene que practicarlo, tiene que hacerlo real en nuestras vidas, en los barrios, en las organizaciones."Conclusión del plenario. Articular resistencias locales e internacionales que pongan la vida y los cuidados en el centro; tender puentes entre luchas feministas, antirracistas y anticoloniales; combinar calle, tribunales, comunicación y academia.

El encuentro concluyó con un compromiso colectivo: volver a encontrarnos en Uruguay 2027 y León 2028, manteniendo encendida esta red de afectos, pensamiento y acción feminista transatlántica.

El encuentro concluyó con un compromiso colectivo: volver a encontrarnos en Uruguay 2027 y León 2028, manteniendo encendida esta red de afectos, pensamiento y acción feminista transatlántica

Mujeres y conflictos ecoterritoriales:

Impactos, estrategias y resistencias

de Rocío Silva Santiesteban

Entrepueblos ha promovido la edición ampliada y revisada del libro *Mujeres y conflictos ecoterritoriales: Impactos, estrategias y resistencias*, de Rocío Silva Santiesteban. Esta nueva edición de un texto tan potente y necesario, profundiza en la relación del capitalismo extractivista por despojo, el colonialismo, el patriarcado y sus impactos sobre los cuerpos de las mujeres y sus territorios, ambos espacios en disputa y sujetos en resistencia.

El libro fue realizado en un esfuerzo conjunto con nuestras copartes, Derechos Humanos Sin Fronteras, Aprodeh, Demus, y con el apoyo financiero del Gobierno Vasco y de la Generalitat Valenciana. Os presentamos el apasionado y lúcido prólogo realizado por **Rita Segato**.

Esta deslumbrante obra de Rocío Silva Santisteban me lleva de la mano por caminos que busco desde hace mucho tiempo. Sus más de quince años acompañando a mujeres campesinas e indígenas quechuas, yaneshas y caxas, y sus voces inscriptas en este libro hacen posible que pueda encontrarme con sus luchas, estrategias, deliberaciones y decisiones, y me permite pensar en conversación con ellas.

Cuando recibí el convite para escribir este prólogo, la autora me anticipó que tres conceptualizaciones mías se encontraban presentes en su obra, es decir, fueron de utilidad para su análisis. Esos conceptos habían sido por lo menos cinco, que menciono a seguir.

1. El orden patriarcal como un orden plenamente político, fundacional y permanente indispensable para comprender la violencia, el poder y la desigualdad.

2. El vínculo y afinidad existente entre cuerpo femenino y territorio, de forma tal que la violencia y dominación ejecutada sobre el territorio encontraba su escuela y su habitus en la violencia y dominación ejercida sobre el cuerpo de las mujeres –dato comprobable al relevar la evidencia de locales de prostitución y rutas de trata de mujeres en las zonas mineras y de construcción de hidroeléctricas de todo nuestro continente.

3. La "pedagogía de la crueldad" como aquellas prácticas que a partir de la conquista y hasta el presente van modificando nuestro umbral de tolerancia hacia el sufrimiento impuesto por la dominación y modelan nuestra visión de mundo transformando la vida en cosa –la vida, lo vivo y transitorio no es apropiable, las cosas sí lo son: cuerpos, paisajes, bosques, ríos y lagos ahora objetos de captura.

4. Las contra-pedagogías de la crueldad que resultan de la percepción, muy especialmente por parte de las mujeres, del efecto de la cosificación de la vida y de sus estrategias para resistirlo.

La autora propone que justamente de la experiencia del vínculo cuerpo femenino-territorio puede emanar una contra-pedagogía resistente al extractivismo.

5. Y, finalmente, la identificación por parte de Rocío Silva Santistéban, de la distintiva insubordinación por parte de las mujeres, cuyo movimiento de defensa de los territorios interpretó a partir de lo que he descripto como una "ética de la desobediencia" en oposición

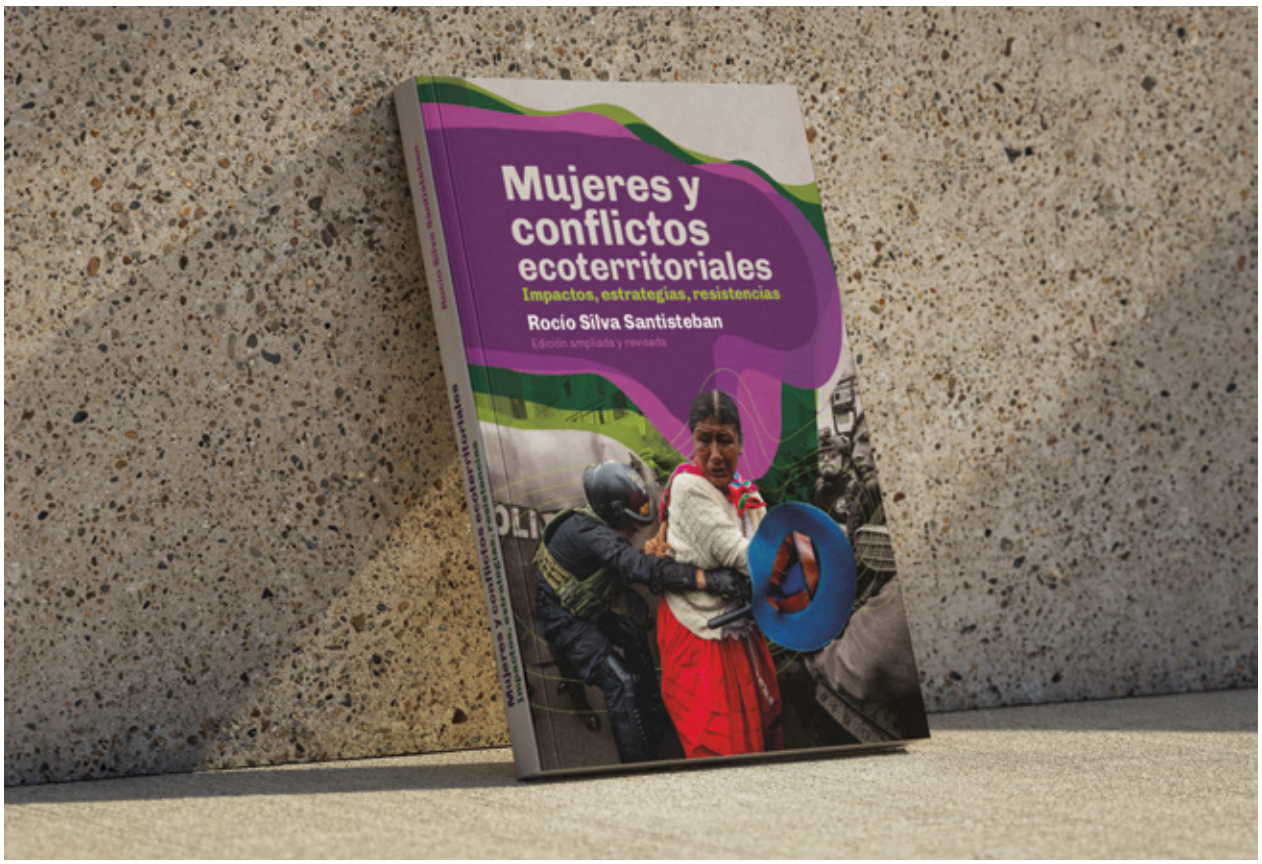
a una ética de la conformidad, más propia de los hombres. Las mujeres se distancian del activismo masculino, más propenso a acatar las propuestas de negociación de los usurpadores siempre basadas en la monetarización de los acuerdos.

Dicho esto, y después de reconocer en el texto de la obra cinco propuestas oriundas de mi reflexión teórica, voy ahora a reciprocar en este prefacio, como es propio de las prácticas femeninas en los jirones de comunalidad que aún subsisten en nuestras cocinas y oficinas.

Lo haré, en sentido inverso, localizando en la etnografía del activismo que esta obra nos brinda datos que contribuyen a la confirmación y ampliación de conceptos que me encuentro aún elaborando. Procederé apenas presentándose como una pauta para la reflexión futura.

En primer lugar, a partir de la lectura, emerge la clara imagen de que la estructura del mundo no es solo la de una colonialidad permanente.

Que a esto puede agregársele la idea de que la estructura del mundo es la de una conquistualidad permanente. ¿Por qué? Porque sus espacios de existencia, cuidado y trabajo productivo son claramente percibidos como apropiables. El sentido común de la sociedad normatiza la posibilidad de la expropiación y expulsión de las mujeres de sus territorios-cuerpo. Esa percepción es lo que surge cuando nos asomamos a las vidas de las protagonistas de esta obra, así



como también sus sofisticadas e idiosincráticas estrategias demuestran que sus consciencias identifican el peligro de una conquista inminente y actual de sus nichos existenciales, y saben responder.

Siempre he dicho que la mujer es "la sujeta del arraigo". La obra de Rocío Silva Santisteban lo demuestra. La experiencia del arraigo y su defensa emerge como una pulsión femenina en la lectura de esta obra. La autora nos dice: "Una vez más se repite esta ontología diferenciada femenino/ masculino en torno al tema del territorio: para los varones tradicionales la lucha es ganar ese pedazo de tierra y poseerla; para las mujeres es sentirla, cuidarla, protegerla y vivirla. No se trata solo de una victoria, se trata de la vida misma. No es una confrontación para mantener una posesión, es una persistencia en la vida".

La experiencia del arraigo implica la concepción de un nicho territorial como no homologable, como desprovisto de equivalente. No existe por lo tanto convertibilidad. Para que la monetarización, aceptada por el activismo masculino como compensación, sea posible, ella debe poder contar con la referencia de una grilla monetaria universal que permita medir equivalencias. Pero el arraigo, es decir, el apego a un paisaje como códice en el cual se ha inscripto una memoria y una historia particular de familias y de pueblo, impide la posibilidad de medir equivalencias y, por lo tanto, impide la convertibilidad y la monetarización. La concepción femenina del territorio se organiza de esta forma, se apoya en la experiencia del arraigo definido a partir de un nicho existencial que se resiste a ser conmensurado. Esa es la experiencia femenina del territorio habitado, tal como se manifiesta en los testimonios de las mujeres que protagonizan esta obra.

Encontramos, por lo tanto, en estas páginas, ejemplos valiosos de lo que he venido definiendo como una "politicidad de cuño femenino", con sus características propias. Para proponerlo, parto de la idea de que masculino y femenino son dos cursos históricos, aunque no cuerpos, pues la transitividad de género no fue motivo de condena en el mundo pre-colonial: no pesaba la determinación biológica de la manera en que la conquista y la lógica cartesiana pasaron a imponerla. La politicidad masculina ejercida "casa afuera" tuvo su historia que condujo a la gestión de Estado. La politicidad femenina es la que transitó por la gestión doméstica, que por mucho tiempo y hasta el presente en la vida comunal no ha sido ni íntima ni privada, sino una forma otra de administración de la vida con intenso impacto en el destino colectivo. Hasta el presente, la vida en comunidad contiene esta dualidad, estas dos plenas politicidades y ontologías, estas dos modalidades de transitar por la historia. Es por eso que, en la obra que aquí presentamos, puede identificarse claramente cómo el activismo de las mujeres es diverso, es otro, es diferente con relación al activismo de los hombres.

Eso me hace afirmar que la investigación de Rocío Silva Santisteban aporta elementos importantísimos que nos permiten continuar elaborando la diferencia entre la politicidad propia de la historia de los hombres y la politicidad propia de la historia de las mujeres."

Escuela Acción Entrepueblos: Colectivizando esperanzas

Rozina Bertran, Natalia Riera y Nuria Pascual
Educación Transformadora Entrepueblos

Ilustraciones: Emma Gascó

Con la convicción de que el aprendizaje colectivo es una herramienta de transformación social, desde Entrepueblos impulsamos la primera edición de la Escuela Acción Entrepueblos, un espacio de formación y reflexión. Esta iniciativa surge de la necesidad de generar un espacio para pensar juntas y también de trazar estrategias para sostener la vida en tiempos de crisis múltiples.

En esta primera edición, queremos poner el foco precisamente en la esperanza: no como una actitud pasiva, sino como una herramienta de resistencia y transformación. La esperanza entendida como un acto político y vital que nos impulsa a imaginar otros mundos posibles y a organizarnos para hacerlos realidad.

Nos preguntamos: ¿Qué alternativas podemos construir frente a las múltiples crisis que nos atraviesan? Necesitamos activar mecanismos de transgresión, cambiar el orden de un sistema desigual y patriarcal, y apostar por la organización colectiva, no sólo para denunciar las injusticias, sino también para establecer lazos de cuidado, de acompañamiento y de sostén mutuo.

Construir esperanza cuando nos sentimos vulnerables es un ejercicio profundo de resistencia. Es mantener el compromiso personal y la dignidad para defender la vida y la sociedad que queremos. Es fortalecer la solidaridad y la resiliencia en las comunidades, tanto en nuestros territorios como en el exilio y la diáspora. Y también es cuidar la fortaleza cultural y espiritual, porque los rituales, los símbolos y las prácticas compartidas son formas de seguir resistiendo.

Aunque esta es la primera edición, la intención es consolidar un proceso continuista donde se articulen experiencias, saberes y luchas que buscan construir alternativas feministas, decoloniales y sostenibles frente a las múltiples crisis que atraviesan nuestros territorios y cuerpos. Queremos que sea un espacio de aprendizaje compartido y sostenido en el tiempo, que se renueve en cada edición y que contribuya a fortalecer la incidencia de los movimientos sociales y comunitarios.

La propuesta de esta primera edición se estructura en torno a tres ejes temáticos que se complementan y enriquecen mútuamente, y que actúan como palanca para este colectivizar saberes y esperanzas para la acción: internacionalismo feminista, soberanías y derechos y justicia social.

INTERNACIONALISMO FEMINISTA

El primer módulo aborda la dimensión internacionalista del feminismo como movimiento que, a lo largo de la historia, ha sabido tejer redes de solidaridad y acción comunitaria entre las mujeres y disidencias de todo el mundo. Este módulo nos invita a reflexionar sobre las interconexiones entre las luchas locales y globales, sobre las múltiples formas de opresión que afecta a las mujeres, y disidencias así como las alianzas que se construyen para enfrentarlas. El movimiento feminista ha estado y estará siempre al frente de la lucha por los derechos humanos. En este sentido, nos recuerda que los feminismos siempre han sido, en esencia, un movimiento global.

Contaremos con las aportaciones de Míriam Nobre (Brasil), y Yayo Herrero (Estado Español), quienes desde sus experiencias desde el ecofeminismo, el pensamiento crítico y la práctica internacionalista, aportan una mirada amplia sobre cómo los feminismos del Sur global y del Norte pueden dialogar y construir respuestas conjuntas. La dimensión internacionalista nos recuerda que "si nos tocan a una, nos tocan a todas", y que sólo una articulación global desde los cuidados, la solidaridad y la justicia podrá hacer frente a la crisis civilizatoria que vivimos.

Junto a ellas,reflexionaremos sobre la necesidad de una transformación profunda que ponga en el centro los cuidados, la sostenibilidad de la vida y la justicia social.

SOBERANÍAS

El segundo eje, centrado en las soberanías, propone un análisis crítico del modelo de desarrollo y de los extractivismos como continuidad del colonialismo. Profundizaremos en el concepto de soberanías, en plural, como una reivindicación del derecho de los pueblos y comunidades a decidir sobre sus cuerpos, territorios y recursos. La violencia intrínseca del sistema capitalista y patriarcal, que mercantiliza los territorios y los cuerpos para sostener la acumulación sin límites, es una una lucha histórica que llevan haciendo desde los feminismos territoriales, indígenas y campesinos.

En este módulo contaremos con las intervenciones de Alejandra Santillana (Ecuador) y Àlex Guillamón (Catalunya), quienes compartirán sus experiencias en torno a las resistencias frente al extractivismo, la economía solidaria y las propuestas de transición ecosocial. Repensaremos el "desarrollo" desde el "buen vivir" y de avanzar hacia formas de soberanía alimentaria, energética y comunitaria que garanticen la equidad y la sostenibilidad.

A través de sus reflexiones se plantea una pregunta esencial: ¿qué significa hablar hoy de soberanía en un mundo atravesado por el despojo, la especulación y la crisis climática?

DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL

El tercer eje se centra en los derechos y la justicia social con el propósito de explorar cómo podemos imaginar y construir sociedades más justas e inclusivas en un contexto de crisis múltiples. Desde Chile, a través de la voz de Paz Aedo, abordaremos sobre la esperanza como fuerza transformadora y sobre la necesidad de repensar las estrategias de resistencia desde lo colectivo, lo emocional y lo ético.

Este módulo invita a mirar la justicia más allá del marco jurídico, entendida también como una práctica cotidiana que promueve la igualdad, la dignidad y el respeto a la diversidad. La propuesta se orienta a identificar nuevas formas de compromiso social y político que fortalezcan el tejido comunitario y la capacidad de acción de los movimientos.

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE COLECTIVO

La Escuela Acción Entrepueblos busca ser un espacio de encuentro y diálogo entre personas y organizaciones que trabajan por la transformación social. La metodología combina sesiones formativas, materiales audiovisuales y espacios de debate abiertos, con el objetivo de favorecer la participación activa y el intercambio de saberes entre distintos territorios y realidades.

Este formato permite que activistas, investigadoras, defensoras de derechos humanos y personas vinculadas a los movimientos sociales compartan experiencias, generando un aprendizaje bidireccional y enriquecedor. La diversidad de voces y trayectorias es uno de los principales valores de la Escuela, que aspira a ser un lugar donde se escuchen y reconozcan tanto los saberes académicos como los saberes populares.

La Escuela Acción tiene un recorrido histórico en nuestra organización que ha venido antecedida por procesos de formación emancipadora en formato escuela de verano en 2016 y 2017, y surge de la necesidad continua de articular espacios abiertos para compartir experiencias de luchas desde abajo, crear alternativas colectivas, desde la defensa de la tierra, los derechos políticos y sociales en las diversas partes del mundo. Con el objetivo de formar en estrategias y herramientas para liderar procesos de transformación social. Ahora retomamos este camino e iniciamos un proceso que esperamos tenga continuidad en el tiempo y contribuya a generar espacios de deconstrucción y esperanzas.

Telf. 93 268 33 66
info@entrepueblos.org www.entrepueblos.org
www.facebook.com/Entrepbs @EntrepbsHarte www.instagram.com/entrepbs

NOS PUEDES ENCONTRAR EN

ANDALUCÍA
- C/ José Mª Moreno Galván, 18, Bl.K - 2º B
  41003 Sevilla · T. 616 564 551
- dologs60@gmail.com

ASTÚRIES
- ep.asturies@entrepueblos.org

CASTILLA-LA MANCHA
- ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTILLA Y LEÓN
- ep.valladolid@entrepueblos.org
- ep.burgos@entrepueblos.org
- ep.cyl@entrepueblos.org
- entrepueblosencastillayleon

CATALUNYA
- C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
- C/ Raiers 13 · 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
- Carrer d'en Blanco, 73, piso 1
  08028 Barcelona
- penedes@entrepobles.org
- entrepoblespenedes.wordpress.com
- @EntrePobles_Tgn
- EntrePobles-Camp-de-Tarragona

COMUNIDAD DE MADRID
- ep.madrid@entrepueblos.org
- EntrepueblosMadrid

EUSKAL HERRIA
- herriarte@herriarte.org

NAVARRA
- 77urbina@gmail.com

ILLES BALEARS
- C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
- mallorca@entrepobles.org

PAÍS VALENCIÀ
- C/ Juan de Mena 18 · 46008 Valencia
- paisvalencia@entrepobles.org
- alacant@entrepobles.org
- EntrepoblesPaisValencia

REGIÓN DE MURCIA
- ep.murcia@entrepueblos.org

APORTACIONES ECONÓMICAS

IBAN (ES05) Triodos Bank (1491) Oficina (0001) Núm. c.c. (21-3000079938) • Avinguda Diagonal, 418, 08037 Barcelona

EntrePueblos - BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Solicitud de ingreso como socio/a

Nombre y apellidos _____
_____ NIF * _____
Fecha de nacimiento _____
Dirección _____
_____
C.P. _____ Población _____
Teléfono _____ Profesión _____
Correo electrónico _____

Cuota anual ____77 € ó _____ e
Si tienes dificultades económicas ponte en contacto para flexibilizar tu aportación.
EntrePueblos recomienda fijarla en el 0,7% del sueldo.

Orden de pago para la Entidad Bancaria

Banco / Caja _____

NUMERO DE CUENTA - IBAN				
IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	NÚM. CUENTA

Les ruego que desde la presente pague mis recibos que la ONG EntrePueblos les presente al cobro con cargo a mi cuenta
Nombre y apellidos _____
Dirección _____
C.P. _____ Población _____

Firma

*NIF imprescindible para desgravación en el IRPF.
Aviso legal: De conformidad con el *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 ("RGPD")*, la asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte se hace responsable y garantiza la cofidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, que se utilizarán únicamente para poder formalizar la inscripción y recibir la información como socio/a, y no se cederán a terceros en ningún caso. Se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a través de nuestra dirección postal (Carrer d'en Blanco, 73, 1r pis · 08028 Barcelona)